



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Derecho privado

Derecho civil

MODIFICACIÓN
DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA
A FAVOR DE LOS HIJOS
EN ÉPOCA DE CRISIS ECONÓMICA

Paula Gómez Hernández

Tutora: Nieves Martínez Rodríguez

Curso 2014/2015

Junio de 2015

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Derecho privado

Derecho civil

MODIFICACIÓN
DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA
A FAVOR DE LOS HIJOS
EN ÉPOCA DE CRISIS ECÓNOMICA

CHILD SUPPORT MODIFICATION
IN TIMES OF FINANCIAL CRISIS

Paula Gómez Hernández

Fdo:

Tutora: Nieves Martínez Rodríguez

Fdo:

Curso 2014/2015

Junio de 2015

RESUMEN (15 líneas)

La obligación alimenticia a los hijos es aquella relación jurídica por la cual uno de los progenitores se encuentra obligado a prestar lo necesario para el sustento, habitación educación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentista. En el caso de los menores de edad, el juez deberá tener en cuenta en todo momento el interés superior del menor.

La cuantía de la obligación de alimentos puede ser modificada cuando se produzcan cambios sustanciales en las circunstancias que dieron lugar a su determinación. Además, la modificación de la pensión de alimentos únicamente surte efecto desde el momento en que la sentencia se acuerda y no desde la fecha de interposición de la demanda inicial.

En la actualidad, muchos obligados al pago de la pensión de alimentos no pueden hacer frente al pago de la obligación debido a cambios que afectan a su salario o nivel de vida, como consecuencia de la actual crisis económica y financiera. La regulación de esta cuestión ha experimentado cambios, que deben ser analizados teniendo muy en cuenta el impacto que puede causar en la vida y los recursos de aquellos a los que afecta.

PALABRAS CLAVE: pensión de alimentos, hijos, interés superior del menor, modificación de medidas, efecto retroactivo, crisis económica.

ABSTRACT

Child support is a periodic payment made by a parent for the care, support, health care expenses, education and welfare of the child. In order to establish an amount for child support, the court will try for the benefit of the minor child.

A child support order can be modified when a substantial change in circumstances has taken place since the initial child support determination was made. Furthermore, the modification takes effect the moment the judgement is final, and not the moment the initial claim was issued.

A lot of people these days are struggling financially trying to make child support payments due to a change in their work or living situation, as a result of the impact of the current economic and financial crisis.

Child support laws have undergone changes and have a substantial impact on the lives and resources of the people involved.

KEYWORDS: child support, benefit of the minor, measure modification, retroactive effect, financial crisis.

Nombre de la estudiante: Paula Gómez Hernández

e-mail de la estudiante: paulagohe@usal.es

Tutora: Nieves Martínez Rodríguez.

ÍNDICE

MODIFICACIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA

A FAVOR DE LOS HIJOS

EN ÉPOCA DE CRISIS ECONÓMICA

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS.....	8
2.1 Fundamento del derecho de alimentos debidos a los hijos.....	8
2.2 Diferenciación entre la obligación de alimentos a los hijos mayores de edad o emancipados y a los hijos menores de edad.....	9
2.3 Obligación de alimentos a los hijos menores de edad.....	10
2.4 Obligación de alimentos a los hijos mayores de edad o emancipados.....	12
3. EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS.....	14
3.1 Introducción.....	14
3.2 Aspectos generales del procedimiento de modificación de medidas.....	15
3.2.1 Regulación legal.....	15
3.2.2 La causa y el objeto.....	15
3.2.3 Legitimación y partes.....	19
3.3 Tipos de procedimiento de modificación de medidas.....	20
4. MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA.....	22
4.1 Efectos de la crisis en la pensión alimenticia.....	22
4.2 Reducción de la cuantía de la pensión alimenticia.....	23
4.2.1 Reducción de ingresos del progenitor obligado al pago.....	23

4.2.2 Aumento de las necesidades del progenitor obligado al pago.....	31
4.2.3 Aumento de ingresos del progenitor custodio.....	32
4.2.4 Cambio de convivencia de los hijos.....	33
4.2.5 Disminución de las necesidades de los hijos.....	34
4.2.6 Percepción de ingresos por parte de los hijos mayores de edad.....	34
4.3 Aumento de la cuantía de la pensión alimenticia.....	35
4.3.1 Aumento de las necesidades de los hijos	35
4.3.2 Aumento de los ingresos del obligado al pago de los alimentos.....	36
4.3.3. Disminución de los ingresos del progenitor con el que conviven los hijos	36
4.4 Extinción de la pensión alimenticia.....	37
4.4.1 Extinción de la pensión por obtención de ingresos por parte del hijo	37
4.4.2. Extinción de la pensión por encontrarse el hijo en disposición de trabajar	38
4.4.3 Extinción de la pensión por falta de rendimiento escolar o falta de aplicación al trabajo.....	38
4.4.4 Extinción de la pensión por contraer matrimonio el hijo.....	39
4.4.5 Extinción de la pensión por falta de convivencia del hijo con los padres...	39
4.4.6 Extinción por falta de ingresos del progenitor obligado al pago.....	39
4.4.7 Extinción por cumplimiento de las cláusulas del convenio regulador.....	40
4.4.8 Extinción al ser condenado el hijo por agredir al padre.....	40
4.5 Limitación temporal.....	41
4.6 La suspensión temporal de la pensión alimenticia.....	42
4.7 Modificación del sistema de cuantía de la pensión.....	45
4.7.1 Modificación de la cláusula de gastos extraordinarios.....	46
4.7.2 Modificación de la forma de prestar alimentos.....	46
4.7.3 Modificación del índice de actualización.....	47
4.8 Garantías para el cumplimiento de la obligación.....	47

4.9 La irretroactividad de la sentencia de modificación de medidas.....	48
5. CONCLUSIONES.....	50
6. BIBLIOGRAFÍA.....	53
7. JURISPRUDENCIA.....	56
8. ANEXOS.....	61
8.1 Anexo I.....	61
8.2 Anexo II.....	62

1. INTRODUCCIÓN

Las medidas que se acuerdan en los procedimientos matrimoniales, aunque nacen con vocación de permanencia, es frecuente que no permanezcan estáticas y que necesiten ser modificadas, atendiendo para ello a unos parámetros objetivos fijados por el legislador y matizados o perfilados por la jurisprudencia. Los requisitos que deben concurrir para que una demanda de modificación pueda ser admitida a trámite son de diversa índole y una vez que el Tribunal competente los considera suficientemente acreditados, resultará pertinente la modificación de medidas.

Desde hace unos años se ha ido produciendo un aumento de la litigiosidad en este aspecto, debido al gran número de solicitudes de modificación de medidas derivadas fundamentalmente de la crisis económica en la que estamos sumidos y los cambios que se vienen produciendo en la sociedad y en la legislación sobre la custodia compartida. El impacto de la crisis económica en las circunstancias personales y patrimoniales y el alarmante nivel de desempleo, condicionan en gran medida esta situación. Además, debe también tenerse en cuenta la realidad social que subyace, ya que detrás de cada una de las demandas de modificación de medidas existe una historia humana que afecta a un conjunto de personas, cuya situación tanto personal como patrimonial puede verse gravemente alterada.

Teniendo esta cuestión muy presente, el presente Trabajo de Fin de Grado se centra en la noción de la obligación de alimentos debida a los hijos, sus presupuestos, el contenido de la prestación y su cuantía. También tiene por objeto llevar a cabo un análisis más exhaustivo del procedimiento de modificación y extinción de la obligación, así como una reflexión acerca de su creciente utilización con motivo de la crisis económica. Muchas veces como mecanismo de adaptación a una nueva situación patrimonial o personal del sujeto, que ha podido experimentar variaciones sustanciales desde la fijación inicial de las medidas.

2. ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS.

2.1 Fundamento del derecho de alimentos a los hijos.

La deuda alimenticia es aquella relación jurídica por la cual una persona se encuentra obligada a prestar a otra lo necesario para su subsistencia¹. Tradicionalmente se ha planteado el fundamento del derecho de alimentos confrontando dos deberes distintos: por un lado, el de los parientes, quienes tienen el deber moral de amparar a los individuos con quienes les unen vínculos de sangre y se encuentren en situación de necesidad, por otro el del Estado, que se encuentra en la obligación de velar por los ciudadanos desamparados².

DÍEZ-PICAZO y GULLÓN dicen al respecto que “El problema estriba en establecer las líneas de enlace entre uno y otro tipo de obligaciones y el orden de prioridades”³.

Por otro lado, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ rechaza que el Estado pueda desplazar o sustituir a los familiares, pues la solidaridad familiar sigue conservando un papel fundamental en la superación del estado de necesidad y no como una institución arcaica y puramente teórica sino plenamente vigente y con una repercusión práctica de gran importancia⁴.

Por su parte, SÁNCHEZ ROMÁN considera que para la doctrina española el fundamento objetivo de los alimentos es de carácter económico y expresivo de los medios materiales de inmediata aplicación a la vida física y también a la psicológica.

De este modo justifica la doctrina que se incluyan dentro de la noción de

¹HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, “De los alimentos entre parientes”, *Las relaciones paterno-filiales, filiación tutela, guarda, adopción y alimentos entre parientes, Cuaderno III, Cuadernos teóricos* Bolonia, Dykinson, Director Francisco Lledó Yagüe y coordinador Oscar Monje Balsameda, 2012, p. 243.

²Así lo establece RIBOT IGUALADA, Jordi, en *Alimentos entre parientes y subsidiaridad de la protección social*, Tirant lo Blanch, Valencia 1999.

³DÍEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil, IV, Derecho de familia, Derecho de sucesiones*, 10a ed., Tecnos, Madrid, 2008, p. 47 y ss.

⁴MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, *La obligación de alimentos entre parientes*, La Ley, 1a ed., Las Rozas, Madrid, 2002, op. cit., p. 128.

alimentos no sólo las necesidades de la vida física, como podrían ser la alimentación, vestido, hogar, medicinas y cuanto sirva a procurar la normalidad fisiológica de la vida física, sino también los fines instructivos, educativos y sociales de la vida psicológica⁵.

Además, es necesario mencionar que la obligación de prestar alimentos recae tanto en el progenitor no custodio como en el que tiene atribuida la guarda de los hijos, si bien, es cierto que habitualmente en las sentencias y convenios reguladores no se mencionan expresamente los alimentos que debe prestar el progenitor que asume la custodia de los hijos. Ello no es razón para considerar que queda exonerado de tal obligación, ni que los hijos deban ser solo alimentados con lo percibido a través de la pensión de alimentos. De hecho, se suelen tener muy en cuenta las circunstancias que afectan a ambos progenitores y a los hijos, estableciéndose una proporción entre los ingresos de los progenitores y las funciones que el progenitor custodio tiene que asumir, ya que evidentemente la custodia y la convivencia de los hijos suponen unos cuidados, gastos y desvelos, que aunque no pueden cuantificarse económicamente, equivalen a una suerte de pensión de alimentos en el seno de la vivienda familiar a través de la permanente dedicación al hijo.

2.2 Diferenciación entre la obligación de alimentos a los hijos mayores de edad o emancipados y a los hijos menores de edad.

El deber de alimentos respecto de los hijos menores de edad sometidos a la patria potestad va mucho más allá del deber de alimentos entre parientes, en el cual se encuadrarían los alimentos a los hijos mayores de edad⁶. Sin embargo, esta diferenciación entre los alimentos debidos a los hijos mayores y a los menores no ha estado vigente en nuestro Derecho Civil desde siempre⁷. Actualmente, en dicho texto se diferencian ambas figuras, ya que se regulan en el Título VI los alimentos entre parientes (arts. 142 y siguientes) y en el Título VII los comprendidos dentro de la patria potestad (art. 155)⁸.

En este sentido, LACRUZ BERDEJO y SANCHO REBULLIDA distinguen la obligación de alimentos entre parientes (donde consideran incluido al hijo mayor de

⁵SÁNCHEZ ROMÁN, *Derecho Civil*, v. 2, 1912, p. 1226. Citado por COBACHO GÓMEZ, José Antonio, *La deuda alimenticia*, Montecorvo, Madrid, 1990, p. 17.

⁶ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Luis, “¿Hasta cuándo los padres tienen que alimentar a sus hijos?” *Economist and Jurist*, núm. 131, junio de 2009, p. 36 y siguientes.

⁷MORENO MOZO, Fernando, *Cargas del matrimonio y alimentos*, Comares, Granada, 2008, p.10.

⁸MORENO MOZO, Fernando, “Cargas del matrimonio...”, op. cit., p. 10-33.

edad) de la obligación de alimentos respecto de los hijos sujetos a patria potestad, estableciendo lo siguiente: “La opinión dominante opta por la distinción entre la obligación de mantenimiento del cónyuge o los hijos menores y la, más estricta, de alimentos. En particular, el deber de los padres de cuidar y educar al hijo sería esencialmente diverso del deber alimentario común”⁹.

2.3 Obligación de alimentos a los hijos menores de edad.

El fundamento de los alimentos debidos a los hijos menores de edad no emancipados se encuadra en el hecho mismo de la filiación y es uno de los contenidos ineludibles de la patria potestad, así lo establecen los arts. 110 y 111 del Código Civil¹⁰. Prueba de ello es, que el deber de alimentar a los hijos menores se mantiene aún cuando el hijo tenga medios suficientes para sustentarse por sí mismo, si bien en este caso puede suspenderse¹¹, pero nunca extinguirse. Además, el art. 145.3 del Código Civil establece que “cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos, se guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será preferido a aquél”. De este precepto deducimos que los hijos menores tienen preferencia en relación con los demás parientes acreedores del derecho de alimentos.

El deber de alimentos viene comprendido en el art. 154 del Código Civil, que establece que los padres deben velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral así como representarles y administrar sus bienes, encuadrándose el referido artículo más que en la prestación de alimentos *stricto sensu*, en el deber más amplio de mantenimiento que deben los progenitores a sus hijos.

⁹LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, *Elementos de Derecho Civil, IV, Derecho de Familia*, Librería Bosch, Barcelona, 1982, p.73.

¹⁰El art. 110 CC establece que “el padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos”. Por su parte, el art. 111 CC dice que “quedarán siempre a salvo las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos”, aunque al progenitor le haya sido retirada la patria potestad por los motivos que enumera el artículo.

¹¹Como analizaremos más adelante, la STS de 24 de noviembre de 2008 establece la procedencia de declarar en suspenso la pensión alimenticia establecida en favor de una menor en sentencia de separación durante el tiempo en que la menor percibiera una beca por la Federación Española de Gimnasia.

Como establece SERRANO CASTRO¹² la pensión de alimentos a los hijos es una de las obligaciones de mayor contenido ético existentes en nuestro ordenamiento y ha alcanzado rango constitucional. Del art. 39.3 de la CE se extrae que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio¹³, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Además, el deber de alimentos respecto de los hijos menores no se extingue por el hecho de que el progenitor no tenga medios suficientes para sustentarse él mismo, si bien, puede suspenderse cuando se cumplen determinados presupuestos, como analizaremos más adelante, puesto que, recientemente en aplicación de la doctrina de las STSS de 19 de enero y 12 de febrero de 2015, nuestro TS establece que la solución legal para los casos de progenitores que se encuentran en situación de carencia de medios y recursos económicos ha de ser la extinción o suspensión de la obligación alimenticia.

Por otro lado, tanto el contenido, como el fundamento del derecho de alimentos a los hijos menores de edad es distinto del que opera en el ámbito del derecho de alimentos entre parientes. Para la concesión de los alimentos a los hijos menores de edad, no es *conditio sine qua non* acreditar si estos necesitan o no alimentos, sino que durante la minoría de edad, esta obligación viene impuesta *ex lege*.

Respecto a la titularidad del derecho de alimentos de los menores, corresponde al menor aunque es el cónyuge con el cual conviven los hijos menores el que va a recibir la pensión fijada. Además, en los procesos matrimoniales el juez, en todo caso, debe determinar las medidas respecto a los hijos menores, entre ellas la obligación alimenticia, debiendo velar el Juez por el *favor filii* y pudiendo rechazar los acuerdos a que hayan podido llegar los cónyuges a este respecto si considera que pueden resultar perjudiciales para los menores y deberá pronunciarse sobre las medidas no acordadas por los cónyuges de mutuo acuerdo o en un proceso contencioso matrimonial.

En cuanto al contenido, el derecho de alimentos de los hijos menores es de mayor extensión, como afirma SERRANO CASTRO: “Va más allá de la mera

¹²SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, *Relaciones paterno-filiales*, El Derecho, Madrid, 2001, op. cit., p. 186.

¹³Esta situación no siempre se reguló así, pues a lo largo de la historia de la institución del derecho de alimentos los obligados y el contenido eran distintos según fuese la filiación legítima, natural, ilegítima o adoptiva. Con la CE de 1978, y la Ley 11/1981 de 13 de mayo, que modifica el CC en aplicación de la Constitución, se produce una igualdad total de todos los hijos, sean matrimoniales o no.

obligación de alimentos, aun entendida en sentido amplio o civil, y comprende todas las atenciones de precisión acomodadas a los usos y circunstancias de la familia (artículos 93.1 y 1362.1 CC)¹⁴.

Sobre la cuantía de los alimentos, el art. 146 CC establece que esta deberá ser proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; por su parte, el art. 147 CC determina que los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.

2.4 Obligación de alimentos a los hijos mayores de edad o emancipados.

Los alimentos a los hijos mayores de edad se encuadran dentro de la figura de los alimentos entre parientes de los arts. 142 CC y siguientes. Como con la mayoría de edad, la patria potestad se extingue, nunca sería posible encuadrar este débito de alimentos dentro de los deberes propios de la patria potestad¹⁵. De este modo, sólo en el supuesto de que un hijo mayor de edad se encuentre en un estado de necesidad tal que le haga posible ser beneficiario del derecho de alimentos, podrá reclamar alimentos a sus progenitores, con los requisitos que establece el ordenamiento para los alimentos entre parientes.

El derecho de alimentos de los hijos mayores de edad no es incondicional y además, se tiene que acreditar la necesidad de los mismos, sin que exista ninguna presunción legal de dicha necesidad, como ocurría en el caso de los hijos menores. Como dice MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, “La necesidad es un concepto sumamente elástico y variable en relación a un cúmulo de circunstancias de las que forman parte las condiciones de edad y de salud del individuo, el ambiente material en el que ha vivido,

¹⁴SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, en “Aspectos procesales de la reclamación de los alimentos de los hijos mayores de edad dentro del procedimiento matrimonial. Especial referencia a la nueva LEC y a la STS de 24 de abril de 2000, *Revista de Derecho de familia*, núm. 9 (octubre de 2000), p.54.

¹⁵Debe tenerse en cuenta la opción de rehabilitación o prórroga de la patria potestad del 171 CC: “La patria potestad sobre los hijos que hubieran sido incapacitados, quedará prorrogada por ministerio de la Ley al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y subsidiariamente en las reglas del presente título”.

su nivel cultural e, incluso, sus propias aptitudes y aspiraciones en la vida”¹⁶. Sobre esta cuestión también apunta REVERTE NAVARRO: “Sólo desde el plano de la propia necesidad es posible determinar el concepto de la misma”¹⁷.

Tampoco goza de preferencia frente a otros parientes y se ve afectado por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes, si bien la causa de extinción de alimentos del 152.3 CC¹⁸ puede no ser aplicable a los alimentos de los hijos mayores de edad cuando aún convivan en el domicilio familiar. Además, la obligación alimenticia respecto de los hijos mayores de edad podrá prestarse a elección del alimentante, o pagando la pensión que se fije o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos. Sin embargo este derecho de opción no se constituye con carácter absoluto y será siempre proporcional al caudal y medios del que los da y las necesidades de quien los recibe.

Por último, el artículo 93 CC establece que el Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Además, si convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de edad o emancipados que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los alimentos que sean debidos conforme a los artículos 142 y siguientes de Código Civil.

¹⁶ MARTÍNEZ RODRIGUEZ, Nieves, *La obligación legal de alimentos*, op. cit., p.222.

¹⁷ Citado por MARTINEZ RODRIGUEZ, Nieves, *La obligación legal de alimentos*, op. cit., p.221

¹⁸ Establece el art 152.3. CCº Cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia.

3. EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

3.1 Introducción

Tras el surgimiento de una crisis de pareja, mediando o no relación matrimonial, los integrantes de la pareja o en su defecto el Juez, podrán y deberán adoptar las medidas encaminadas a regular en el futuro las relaciones personales, patrimoniales y paternofiliales¹⁹. Con el transcurso del tiempo, algunas medidas se extinguirán automáticamente (como las medidas relacionadas con la patria potestad, la guarda y custodia o el régimen de visitas cuando se alcance la mayoría de edad). En otras ocasiones, puede que no se haya previsto una fecha de extinción, pero con el tiempo, es posible que se alteren los elementos o circunstancias que se tuvieron en cuenta para fijarlas. En estos casos, como prevé el art. 147 del Código Civil, es posible que las medidas adoptadas en un primer momento puedan ser modificadas.

El objeto de estudio del presente trabajo, es únicamente la pensión alimenticia debida a los hijos, tanto menores como mayores de edad, y su modificación. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que entre las posibles medidas fijadas inicialmente y que pueden modificarse o extinguirse, se encuentran la modificación de la patria potestad, de la guarda y custodia, del régimen de visitas, modificación y extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar, de la pensión alimenticia y por último de la pensión compensatoria.

En cuanto la finalidad del procedimiento de modificación de medidas, como manifiesta GONZÁLEZ DEL POZO, lo que pretende conseguir es que exista una exacta correlación o adecuación entre las medidas que están en vigor y la realidad personal, familiar, social y económica de los miembros de la unidad familiar rota, cuyas

¹⁹PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, *La modificación y extinción de las medidas. Aspectos sustantivos y procesales*, Vol. IX, Lex Nova, Madrid, 2007, op, cit, p.29.

relaciones personales y patrimoniales dichas medidas pretenden regular²⁰. Si bien, hay que tener en cuenta que el proceso de modificación de medidas no puede consistir en un proceso de revisión respecto a los pronunciamientos adoptados en un momento anterior, sino que se deben basar en el surgimiento de nuevas circunstancias. Por ello, al interponer la solicitud de modificación de medidas es necesario mencionar, de forma clara y precisa, cuáles son los hechos que se entienden alterados sustancialmente desde que se dictó la sentencia²¹, como analizaremos más adelante.

3.2 Aspectos generales del procedimiento de modificación de medidas.

3.2.1 Regulación legal y ámbito de aplicación.

La regulación legal del procedimiento de modificación de medidas se contiene en los artículos 90, 91 y 100 del Código Civil y en los artículos 775 y 777.9 de la LEC. Dicho procedimiento solo puede utilizarse para solicitar la modificación de las medidas adoptadas en sentencias de separación, nulidad y divorcio o en los procedimientos o uniones de hecho. Sin embargo, no es el cauce idóneo para los supuestos de petición de medidas que no se han acordado previamente en sentencia de separación, nulidad o divorcio o la dictada para regular las consecuencias del cese de la pareja de hecho²² o para la actualización de alguna cláusula o medida de contenido económico. Tampoco resultaría admisible para la impugnación del convenio por vicio o error en el consentimiento ni para conseguir una nueva valoración de los hechos alegados en un anterior procedimiento o para instar la nulidad de las actuaciones de un procedimiento anterior.²³

3.2.2 La causa y el objeto

Como ya hemos mencionado, el procedimiento de modificación de medidas no constituye una especie de recurso extraordinario contra lo decidido en sentencia firme, sino que va a suponer un modo de atender a la modificación sustancial de las

²⁰GONZÁLEZ DEL POZO, Juan Pablo, “La modificación de medidas”, en *Los procesos de familia: una visión judicial: compendio práctico de doctrina y jurisprudencia sobre los procesos de familia y menores*, Colex, Madrid, 2007, p. 595.

²¹Ello se deduce de la SAP de Ciudad Real de 25 de enero de 2000, SAP de Madrid de 24 de mayo de 1996, SAP de Barcelona de 6 de abril de 1998, SAP de Alicante de 26 de octubre de 2000.

²²PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación y extinción...” op cit, p. 31.

²³Art 240 LOPJ. “1. La nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales”.

circunstancias. Los requisitos²⁴ que deben cumplirse son los siguientes:

-En primer lugar, *que los hechos en los que se base la demanda de modificación se hayan producido con posterioridad a la sentencia que dictó las medidas*²⁵. Sin embargo, de forma excepcional, en alguna ocasión se ha admitido una demanda de modificación basada en circunstancias acontecidas en el pasado pero que no pudieron ser alegadas por la parte al ser desconocidas²⁶.

-En segundo lugar, *que la variación o cambio de circunstancias tenga relevancia legal y entidad suficiente como para justificar la modificación pretendida*²⁷. Los hechos que motivan la demanda de modificación, deben ser tanto cualitativa como cuantitativamente de una importancia que suponga un cambio sustancialmente profundo respecto a la situación anterior. No puede estar basada en simples criterios de estimación subjetiva, sino en razones necesarias y convenientes. Además, cuando estamos ante medidas que afectan a los hijos menores, se debe tener muy en cuenta el interés superior del menor²⁸.

-En tercer lugar, *que el cambio de circunstancias sea permanente o al menos que no obedezca a una situación de carácter transitorio*²⁹. Esto fue establecido así por el legislador para evitar continuos incidentes de modificación de medidas que se podrían producir al hilo de los diferentes estadios de la vida tanto de los cónyuges como de los hijos³⁰. Por ejemplo, la SAP de Murcia de 29 de diciembre de 2011 sí consideró que procede la rebaja de la pensión de alimentos porque la situación de paro del progenitor en el momento de interponer la demanda no era equiparable a la que tenía cuando se fijó

²⁴Respecto de los requisitos que deben concurrir se pronuncia, entre otras, la sentencia de 14 de octubre de 2008 de la Audiencia Provincial de Castellón, en la que reitera lo expuesto en la Sentencia de 8 de noviembre de 2005, que se pronuncia sobre los artículos 775 LEC y 90 y 91 CC.

²⁵ANDRÉS JOVEN, Joaquín María, “Modificación de las medidas definitivas”, en *Tratado de Derecho de Familia: aspectos sustantivos y procesales: adaptado a las Leyes 13/2005 y 15/2005*, Sepín, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2005, p. 916 y ss.

²⁶Así lo establece la SAP de Ciudad Real de 15 de febrero de 2005.

²⁷PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, *La modificación y extinción de las medidas. Aspectos sustantivos y procesales*, Vol. IX, Lex Nova, Madrid, 2007, op, cit, p.34.

²⁸Dice la SAP de Navarra de 27 de mayo de 2002 que “no se trata de aportar criterios meramente subjetivos o de complacencia, sino verdades razonadas, suficientemente probadas, necesarias y convenientes para la viabilidad del efectivo cese de las medidas en su día acordadas”. Por otro lado, la SAP de Navarra de 20 de septiembre de 2004 establece que “Las alteraciones de las circunstancias de carácter temporal, episodio o coyuntural no puede justificar una modificación de medidas”.

²⁹Vid. SAP de Baleares de 9 de mayo de 2002, SAP de Almería de 9 de junio de 2000, SAP de Albacete de 10 de julio de 1998, SAP de Palma de Mallorca de 12 de mayo de 1997, SAP de Palma de Mallorca de 16 de noviembre de 1998, SAP de Palma de Mallorca de 26 de enero de 1999.

³⁰PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación....”, op, cit, p.35.

la pensión de alimentos. En el momento en que se fijó, se alternaban periodos de paro con otros de trabajo y, sin embargo, dada la crisis económica y extensión del paro en el sector de la construcción, se estimó que la situación de desempleo era duradera en el tiempo.

-En cuarto lugar, *que se trate de circunstancias sobrevenidas ajenas a la voluntad del cónyuge que solicita la modificación*³¹. En caso de que la causa haya sido buscada voluntariamente por uno de los cónyuges, no se admitirá a trámite la demanda. Siguiendo esta línea encontramos la STS de 8 de noviembre de 2010 (STS 7072/2012), que establece la obligación del progenitor no custodio de seguir abonando alimentos a pesar de haber dejado de trabajar voluntariamente.

Dice CABEZUELO ARENAS al respecto: “Mal protegeríamos los intereses de los hijos si permitiésemos que el endeudamiento voluntario del alimentante comprometiera el pago de las pensiones de aquéllos, proporcionando al progenitor el argumento idóneo para apelar a una merma en su liquidez. Quien libremente acomete nuevas empresas o emprende inversiones de cierta envergadura, no ha de comprometer en modo alguno, la manutención de sus hijos, debiendo afrontar las consecuencias adversas que produzcan para su economía aquellas decisiones temerarias que voluntariamente adoptó”³².

-En quinto lugar, *que se acrediten en forma las circunstancias por el cónyuge que solicita la modificación el cambio de circunstancias*. Los hechos que se alegan deberán probarse, por todos los medios de prueba admitidos en derecho y la carga de la prueba recaerá siempre sobre el cónyuge que solicita la modificación³³.

Respecto a esta cuestión, GONZÁLEZ DEL POZO menciona que “la actividad probatoria a desplegar en el proceso modificadorio ha de dirigirse tanto al momento en que concurrían las circunstancias existentes cuando se adoptaron las medidas cuya modificación se pretende como al momento actual, con el fin de valorar si se ha

³¹Vid., SAP de Baleares de 9 de mayo de 2002, SAP de Valencia de 11 de septiembre de 2003, SAP de León de 27 de noviembre de 2003, SAP de Madrid de 29 de marzo de 2007, SAP de Murcia de 27 de marzo de 2009, SAP de Valencia de 10 de abril de 2006, SAP de Barcelona de 11 de mayo de 2006, SAP de Barcelona de 28 de junio de 2007, SAP de Castellón de 10 de diciembre de 2007.

³²CABEZUELO ARENAS, Ana Laura, *Polémicas Judiciales sobre Significado, Fijación Contenido y Variabilidad de la Pensión de Alimentos de los Hijos tras la Separación y Divorcio (art. 93 CC)*, Aranzadi, 2010, p. 123.

³³PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier y PÉREZ RUFIÁN, Laura, “La crisis económica y la pensión alimenticia”, *Revista de Derecho de Familia*, Lex Nova, Thomson Reuters, Madrid, 4º trimestre de 2012, Año XIV, p. 44.

producido o no cambio en las medidas”³⁴. Además, si el procedimiento anterior se sustanció de forma contenciosa es suficiente con aportar un testimonio de las pruebas que sirvieron para adoptar las medidas. Por el contrario, si las medidas fueron adoptadas en el marco de un procedimiento de mutuo acuerdo y del convenio regulador no se deduce la situación económica de los cónyuges, dichas circunstancias deben ser probadas en el procedimiento de modificación de medidas.

Este criterio es la base para desestimar algunas demandas, prueba de ello es la SAP Navarra de 20 de Septiembre de 2001, que establece la desestimación de la demanda de modificación de medidas por no haber acreditado cual era la situación económica existente en el momento en que se dictó la sentencia de separación cuyas medidas se pretenden alterar. Situación similar, es la que recoge la SAP de Valladolid de 28 de febrero de 2005, que establece que no procede la modificación de la cuantía de la pensión de alimentos fijada en el convenio regulador aunque el padre figure en alta laboral, puesto que, no se habían acreditado los ingresos que percibía cuando se produjo la separación, dato fundamental para conocer si ha existido o no alteración de circunstancias.

Como para poder iniciar un procedimiento de modificación de medidas, es necesario acreditar que se ha producido una modificación de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para fijar la pensión de alimentos, debemos contar con información precisa de la situación actual de la persona que recibe alimentos. A menudo surgen problemas cuando el alimentante no tiene relación con los hijos mayores de edad y desconoce su situación, y con ello desconoce también la posibilidad de saber en qué momento podría concurrir alguna de las causas que dan lugar a la modificación o extinción de la pensión de alimentos. El Código Civil de Cataluña señala en su artículo 237-9.2 que “El alimentado deber comunicar al alimentante las modificaciones de circunstancias que determinen la reducción o supresión de los alimentos tan pronto como se produzcan”. Por ende, en base a este artículo mediante simple requerimiento del alimentante este podría conocer la situación académica o laboral del hijo. Pero ni en el Código civil ni en otras legislaciones autonómicas existen preceptos similares.

Una solución a este problema podría ser acudir a las diligencias preliminares, con el fin de poder obtener la información necesaria antes de presentar la demanda de

³⁴GONZÁLEZ DEL POZO, Juan Pablo, *Los procesos de familia: una visión judicial...* op. cit., p.598.

modificación de medidas. En alguna sentencia, es posible encontrar solicitudes que establezcan la obligatoriedad de informar periódicamente de la situación académica o laboral del hijo, como es el caso de la SAP de Valencia de 23 de junio de 2010.

3.2.3 Legitimación y partes.

El tema de la legitimación del progenitor que en el proceso matrimonial reclama alimentos a favor del hijo que convive con él ha suscitado enorme disparidad de opiniones³⁵, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina.

Como señala MARTÍNEZ RODRÍGUEZ³⁶ en principio, los hijos mayores están legitimados activamente para dirigir su acción frente a aquellos y el cauce normal será el declarativo correspondiente. Por lo mismo, también los hijos se encuentran legitimados pasivamente para soportar el ejercicio de la acción o de los progenitores pagadores para reducir o extinguir la pensión.

Sin embargo, la situación es distinta cuando la fijación de esos alimentos tiene lugar en el proceso matrimonial de sus progenitores, siendo ello posible cuando el hijo conviva en el domicilio familiar y carezca de ingresos propios (art 93.2 CC). La concurrencia de tales requisitos permite que a la pretensión principal de los cónyuges en el procedimiento matrimonial pueda unirse la de alimentos de los hijos mayores. El problema que surge, es determinar quién está legitimado para reclamar dichos alimentos en el procedimiento matrimonial.

Antes de la Ley 11/1990 de 15 de octubre, que introdujo el segundo párrafo del artículo 93, los alimentos del hijo mayor de edad, aun cuando fuera dependiente económicamente, no tenían cabida en el proceso matrimonial, teniendo el hijo que reclamar los alimentos a que tuviera derecho en un proceso propio para ello, e incluso cuando hubieran sido fijados los alimentos al hijo al ser menor de edad en el momento de la separación o el divorcio, dado que al llegar a la mayoría de edad los alimentos fijados se extinguían y debían volverse a reclamar, siendo todo ello contrario al principio de economía procesal.

Si bien, la reforma de la Ley 11/1990 introdujo los alimentos de los hijos

³⁵MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, T., “El favor progenitoris en relación con los hijos mayores de edad”, *Aranzadi civil*, t. 10, v. 1 (2001), p. 1999.

³⁶MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, “Legitimación para reclamar alimentos a favor de hijos mayores”, en *Actualidad Civil*, La Ley, Las Rozas, Madrid, 2008. P. 590.

mayores en el proceso matrimonial, dando respuesta a la necesidad de proteger al hijo mayor de edad pero que carecía de independencia económica, no aclaró quien ostenta la legitimación procesal para ello, generando, hasta la STS de 24 de abril de 2000, numerosas sentencias contradictorias, donde unas exigían la concurrencia del hijo en el proceso matrimonial, otras otorgaban legitimación al progenitor para reclamar los alimentos del hijo, pero siendo necesaria la autorización expresa de éste, y existiendo otras que consideraban que el hijo no podía intervenir en el proceso matrimonial.

A raíz de la STS de 24 de abril de 2000 queda claramente zanjada la cuestión, pues dicha sentencia reconoce expresamente la legitimación del cónyuge con el que conviven los hijos mayores para demandar del otro su contribución a los alimentos y los pronunciamientos posteriores son ya unánimes al reconocer tal legitimación³⁷. Legitimación que se extiende igualmente al lado pasivo de la relación jurídica, es decir, también al cónyuge conveniente al que debe dirigirse la acción de modificación de medidas solicitando la reducción o extinción de la pensión por parte del cónyuge pagador³⁸.

3.3 Tipos de procedimiento de modificación de medidas.

Cuando hablamos de una modificación de medidas, no es lo mismo que éstas estén fijadas en sentencia contenciosa que en convenio regulador. Distinguimos entre:

-Procedimiento de modificación de medidas solicitado por ambos cónyuges de mutuo acuerdo o por uno con el consentimiento del otro.

-Procedimiento de modificación de medidas a petición de un solo cónyuge.

En el caso de pensiones de alimentos fijadas mediante convenio, se debe tener presente la libertad de pactos que existe entre los cónyuges o progenitores en función del principio de autonomía de la voluntad. PADIAL ALBAS³⁹ afirma que si alguno de

³⁷Numerosas audiencias justifican la legitimación del progenitor para pedir la modificación de medidas. En palabras de las SAP Zaragoza de 19 de mayo de 2000 y 1 de julio de 2002 "No puede negarse plena y exclusiva legitimación a la esposa en toda cuanto discusión se plantee sobre las medidas adoptadas en la sentencia matrimonial, con independencia de la edad de la prole, siendo doctrina pacífica que en los litigios matrimoniales no caben más partes que los cónyuges que integran el matrimonio en crisis" de suerte que "el proceso matrimonial tiene como partes necesarias y excluyentes a los cónyuges, a salvo la especialidad de la intervención del Fiscal en los casos en que es preceptiva".

³⁸MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, "Legitimación para reclamar alimentos...op. cit., p 591.

³⁹PADIAL ALBAS, Adoración, *La obligación de alimentos entre parientes*, Barcelona, Editor J. M. Bosch, op. cit, p. 181 y 182.

estos acuerdos establecieran una prestación insuficiente o inadecuada para satisfacer la necesidad del alimentista, será nulo.

No obstante, las partes pueden modificar de mutuo acuerdo lo pactado en convenio si hay alteración sustancial de las circunstancias, lo que habrá de ser aprobado por el juez y si los alimentos son relativos a intervendrá el MF, en virtud de los art. 90 CC y 777.5 de la LEC por remisión del art. 773.5 y 749 de la LEC⁴⁰.

⁴⁰SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, “*Relaciones...*, op. cit., p. 230.

4. LA MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA.

4.1 Efectos de la crisis en la pensión alimenticia.

La crisis económica ha tenido un efecto muy negativo tanto en la economía como en la esfera profesional, económica, familiar y personal de los ciudadanos, repercutiendo todo ello en la configuración de las pensiones de alimentos⁴¹. Podemos decir con ello, que ha recuperado su protagonismo la solidaridad familiar⁴². Como el número de personas desempleadas se ha visto incrementado con motivo de la crisis económica y muchos otros han visto reducidos sus salarios, el trámite de la modificación de medidas se ha convertido en un paso obligado para aquél que no pueda hacer frente al pago de las pensiones anteriormente fijadas. A pesar de ello, no debe nunca olvidarse la inexcusable obligación de los progenitores de asumir las responsabilidades derivadas de la patria potestad en el caso de los menores, entre ellas el cumplimiento de la obligación de alimentos. Además, como reconoce MARÍN GARCÍA, la situación de crisis ha también ocasionado el aumento de los delitos por impago de pensiones⁴³.

Autores como SERRANO CASTRO se pronuncian al respecto, considerando que resulta evidente que la crisis económica, que al principio parecía no serlo, ha calado de tal forma en la sociedad, que está provocando una profunda modificación no sólo de los usos económicos, sino que marca y tiene influencia directa, incluso, en las relaciones personales y sociales. Es el caso de los procedimientos de Familia y todos los

⁴¹ORDOÑEZ PÉREZ, Ana Belén, *La modificación de medidas tras la separación y divorcio*, Editorial Ley 57, 2012, p. 111.

⁴²ROGEL VIDE, CARLOS, “Crisis económica y solidaridad familiar. Los alimentos entre parientes”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 4, 2012, p. 581.

⁴³MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Teresa, *Derecho de familia, crisis económica y mediación*, en *Mediación en el ámbito civil, familiar, penal e hipotecario: cuestiones de actualidad*, Difusión Jurídica, Madrid, 2013, p. 211.

aspectos derivados de los mismos, desde la forma de afrontarlos hasta la determinación, cálculo y modificación de las pensiones alimenticias, pasando por las propias decisiones judiciales.⁴⁴.

Por su parte, ORDOÑEZ PEREZ⁴⁵ considera que los aspectos más importantes de esta crisis son:

a) Disminución de los procedimientos de divorcio, aumento de los procesos de separación y de los procedimientos de mutuo acuerdo sin necesidad de acudir a la vida contenciosa (ver Anexo I).

b) Incremento sustancial de las reclamaciones en vía ejecutiva de pensiones y procedimientos de modificación de medidas para intentar reducir o extinguir estas.

Por ello, indiscutiblemente deben de ser objeto de análisis en el presente trabajo:

4.2 Reducción de la cuantía de la pensión alimenticia.

4.2.1 Reducción de ingresos del progenitor obligado al pago.

Suele ser el motivo principal de la mayoría de las demandas de modificación de medidas, especialmente durante la crisis. Sin embargo, el solo hecho de que se hayan reducido los ingresos del progenitor obligado al pago no conlleva de forma automática que la pensión alimenticia sea reducida, sino que deben cumplirse los requisitos que se exigen con carácter general, ya mencionados anteriormente:

-El primer requisito es que los hechos en los que se base la demanda se hayan producido con posterioridad al dictado de la sentencia que fijó las medidas.

Existen supuestos en los que se ha solicitado indebidamente la reducción de la pensión nada más producirse un despido, a pesar de haberse cobrado una indemnización importante o cuando, pese a la disminución de ingresos, hay signos externos que indican la posibilidad de pagar la pensión”⁴⁶.

La situación de paro no se consideró como motivo para reducir la cuantía de la

⁴⁴SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, “Efectos de la crisis económica en la fijación de las pensiones alimenticia y compensatoria”, El Derecho, 2001.

⁴⁵ORDOÑEZ PÉREZ, Ana Belén, “La modificación...”, op. cit., p. 111.

⁴⁶MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Teresa, “Derecho de familia, crisis económica...”, op. cit., p. 212.

pensión alimenticia en el caso que analiza la SAP de Alicante de 17 de junio de 2011 donde se establece que “La situación de desempleo no es causa para reducir la cuantía de la pensión alimenticia, pues cuando se fijó se alternaban situaciones de trabajo con desempleo”. Por el contrario, la SAP de Vizcaya de 15 de octubre de 2010 estimó que procedía la reducción de la cuantía, pues considera que si bien el padre siempre había tenido contratos temporales e inestables, alternando con situaciones de desempleo, a partir del año 2008 se constata una importante disminución de las contrataciones laborales⁴⁷.

-En segundo lugar, se exige que la variación o cambio de circunstancias tenga relevancia legal y entidad suficiente como para justificar la modificación pretendida.

Hay que tener en cuenta la gran variedad de situaciones laborales que encontramos en el mercado de trabajo actual, pudiendo establecer una diferenciación de las causas que motivan la reducción de la pensión de alimentos cuando el progenitor obligado al pago *trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia*:

A) Trabajador por cuenta ajena.

En este caso, como los ingresos del progenitor provienen de una fuente externa, ya provengan de una tercera persona física, jurídica o de una administración pública, en principio resultara más fácil comprobar el cambio de circunstancias que en el supuesto del trabajador por cuenta propia. Podemos encontrar varios supuestos:

a) Progenitor que se ha visto despedido o sometido a expedientes de regulación de empleo con la consiguiente disminución de ingresos salariales.

En caso de despido, la situación de empeoramiento patrimonial resulta evidente aunque (al menos antes del inicio de la crisis económica y laboral) la obtención de una indemnización sustancial por la empresa que despide, podía ser tenida en cuenta como incremento patrimonial del obligado al pago. No obstante en la actualidad, se ha de destacar el cambio radical y detrimento que ha implicado el recorte y abaratamiento indemnizatorio en caso de despido, previsto en el RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, dado que ha extendido y facilitado el despido objetivo y ha definido el despido colectivo fundándolo en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción previa acreditación,

⁴⁷ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, y PÉREZ RUFIÁN, Laura, “La crisis económica...”, op. cit., p. 37.

documentación y justificación.

Ese recorte, además de la pérdida actual de expectativas de encontrar un nuevo empleo, ha de tener una significación interpretativa en los procedimientos de modificación de medidas. Como en esos casos de despido es posible que no exista indemnización sustancial y considerable sino tan sólo sea un resarcimiento insuficiente que no puede considerarse incremento patrimonial y a la vez que existe la posibilidad de que el trabajador despedido no pueda tener acceso a un trabajo de similares características al perdido, es posible que en la actualidad el mero hecho del despido sí justificar una reducción de capacidad económica, pudiendo ser considerada como una alteración sustancial de circunstancias para fundar una reducción de la pensión alimenticia.

En la jurisprudencia, encontramos situaciones en las que se produce la pérdida del empleo percibiendo una indemnización, como en el caso de la SAP de Asturias de 15 de marzo de 2011, que establece la reducción de la pensión alimenticia en base a la drástica reducción de los ingresos del padre, sin que el hecho de que haya percibido una indemnización por despido de 16000 euros sea relevante. También encontramos situaciones de pérdida del empleo por parte del progenitor recibiendo únicamente el subsidio de paro donde este hecho no se considera relevante para reducir la pensión alimenticia, como es el caso de la SAP de Córdoba de 2 de mayo de 2006.

b) Progenitor que continúa trabajando en la misma empresa pero cuya remuneración se reduce.

En estos casos, se deberá probar que aún trabajando en la misma empresa y desarrollando el mismo tipo de trabajo, el sueldo se ha reducido de forma trascendente⁴⁸. Si analizamos sentencias dictadas desde el inicio de la crisis, encontramos pronunciamientos como el de la SAP de Burgos de 20 de diciembre de 2010, que entendió que la reducción de los ingresos del progenitor a la mitad de los que tenía en la fecha de fijación de la pensión se trataba de un cambio de circunstancias relevante. Por su parte la SAP de Valladolid de 17 de Septiembre de 2009, declaró que una rebaja del sueldo de 1200 a 1000 euros no es motivo para reducir la pensión alimenticia.

⁴⁸La SAP Sevilla de 27 de octubre de 2004 consideró que no procedía reducir la cuantía porque los ingresos del obligado al pago no hayan experimentado el mismo aumento que el IPC.

Hay que tener cuidado con determinadas situaciones que inducen al fraude, como por ejemplo empresas familiares que coadyuvan con el trabajador en aparentar una situación de crisis, un cambio en la categoría profesional o una reducción de jornada⁴⁹. Cuando el trabajador tiene vinculación con los gestores de la empresa habrá que analizar el motivo que provoca la reducción de la cuantía de la nómina. En este caso, la SAP de Valencia de 12 de enero de 2010 estableció que debe sopesarse con mucha cautela la nómina así como los beneficios de la sociedad cuando sean relatados por el verdadero gestor de la misma máxime cuando se alegue escaso o nulo beneficio y sin embargo la sociedad sufra continuas e inexplicables ampliaciones.

En cuanto al personal al servicio de las Administraciones Públicas, la SAP de Burgos de 22 de Mayo de 2012, estable que el alcance de las reducciones y la cuantía de las mismas no impiden que se cumpla con el deber de prestar alimentos. La reducción de ingresos puede venir provocada por ejemplo por un cambio de categoría profesional⁵⁰. Otro de los motivos podría ser por un expediente sancionador, pero se deberá tener en cuenta el periodo por el que se le ha impuesto la sanción, ya que al no ser una situación permanente en el tiempo, no suele considerarse de suficiente entidad⁵¹.

c) Progenitor que cambia de trabajo o de empresa.

El problema se plantea respecto de los motivos que le llevaron a abandonar el trabajo anterior y a comenzar otro en el que obtiene menos rendimientos. Por un lado, la movilidad laboral es un derecho de los trabajadores que no puede limitarse ni prohibirse. Sin embargo cuando pesan sobre ese trabajador una serie de cargas alimenticias, la jurisprudencia ha considerado tradicionalmente que el cambio de empresa no debe repercutir negativamente en el importe de la pensión alimenticia.

Por ende, deberá justificarse suficientemente cual fue la causa de la decisión, ya que si el cambio de debe exclusivamente a una decisión voluntaria del trabajador, no

⁴⁹La SAP de Cádiz de 18 de septiembre de 2003 establece que “Se mantiene la pensión alimenticia fijada a favor de la hija, en base a los ingresos documentados en los últimos años, pues el cambio de ingresos del padre se ha producido poco tiempo después del inicio del presente procedimiento, ya que en los años dos anteriores ha trabajado con jornada completa y el empleador es un pariente”.

⁵⁰La SAP Asturias de 30 de marzo de 2002, establece que “La reducción de la pensión alimenticia al reducirse sustancialmente los ingresos como consecuencia del cese como agregado laboral en una embajada y su incorporación como letrado del INSS.”

⁵¹SAP Murcia de 17 de diciembre de 2004, dicta lo siguiente “Procede reducir la cuantía de la pensión de alimentos a favor del hijo a la cantidad de 200 euros mensuales dado que el alimentista, como consecuencia del expediente sancionador incoado por el Ministerio de Defensa, solo percibe ahora 667 euros.

suele prosperar la demanda de modificación, al no cumplirse el requisito general de que el cambio de circunstancias debe ser ajeno al progenitor que solicita la reducción de la pensión.

d) Progenitor que desempeña dos trabajos y deja uno de ellos.

Se puede dar el caso de personas que por diversas razones, realizan varias actividades laborales por las que perciben ingresos independientes. Cuando se decide dejar una de estas actividades, el motivo puede ser diverso. Puede venir dado por la ley (por ejemplo por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) o puede deberse a una decisión voluntaria del trabajador. Respecto a este tema no existe un criterio jurisprudencial consolidado y encontramos tanto con resoluciones que consideran justificada la reducción de ingresos⁵² como con resoluciones que desestiman la demanda, principalmente porque con los ingresos que percibe puede abonar la pensión alimenticia⁵³.

B) Trabajador autónomo o por cuenta propia

En este caso existe gran dificultad para poder acreditar la capacidad económica del progenitor, ya que no estamos ante una persona que perciba un sueldo fijo a efectos de poder cuantificar que cantidad de forma clara e inequívoca, como señala PÉREZ MARTÍN⁵⁴. Se considera que no será suficiente con las meras alegaciones que haga el progenitor acerca de la crisis que existe en un determinado sector o que tiene más deudas que beneficios, sino que la reducción de ingresos deberá ser cuantitativamente acreditada. Para ello deben presentarse las declaraciones trimestrales y anuales que se realizan a efectos fiscales, para poder con ello contrastar las liquidaciones que se practicaron en el momento de la adopción de las medidas.

Sin embargo, si fuera suficiente con esta simple acreditación podría incurrirse fácilmente en la ocultación de ingresos, por ello se deberá acudir a otras pruebas de las que se pueda deducir la reducción de ingresos como resultado de su actividad profesional o empresarial. En definitiva, entrarán en juego las presunciones del art. 386 LEC, para lo cual será indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate

⁵² SAP Barcelona de 29 de septiembre de 2004

⁵³ SAP Alicante de 31 de enero de 2005

⁵⁴ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación....”, op, cit, p. 562.

de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

-En primer lugar no basta para la acreditación de la reducción de ingresos la mera presentación de las declaraciones fiscales⁵⁵.

-En segundo lugar, la opacidad suele ser causa de desestimación de la demanda: Así lo establece la SAP de Pontevedra de 22 de Septiembre de 2011.

-En tercer lugar, es necesario llevar a cabo un análisis del nivel de vida que mantiene el progenitor y si es acorde con la reducción de los ingresos que se alega para la modificación de medidas⁵⁶. En ocasiones puede constatarse como el progenitor se descapitaliza de sus bienes o su empresa pasa a manos de terceras personas con las que puede tener relación de parentesco o sentimental. Como regla general en estos casos resulta fácilmente demostrable que el progenitor continua realizando la misma actividad aunque formalmente los ingresos no figuren a su nombre⁵⁷.

-Otra situación que debe ser objeto de análisis, es si la empresa o negocio ha tenido que cerrarse como consecuencia de la crisis económica. En esta línea, encontramos sentencias que aprecian que no concurren las circunstancias necesarias para la modificación cuando se consigue probar que el cambio de circunstancias ha sido provocado o buscado voluntariamente para obtener la modificación de medidas⁵⁸. Una situación parecida es la que analiza la SAP de Castellón de 2 de Diciembre de 2010. Establece dicha sentencia: “No puede aceptarse que quien tiene una profesión y dice estar desempleado, no ejerza ocupación de toda la vida pero conviva con una personas curiosamente de mínima experiencia en las artes gráficas, de lo que vivió toda su vida el esposo. Hay otra interpretación mucho mas natural, que la lógica impone: el esposo trata de aparentar una condición de desocupado en orden a pasar por insolvente y eludir las obligaciones para con sus hijas.”

C) Pase a situación de jubilado

Cuando el progenitor obligado al pago de alimentos cesa definitivamente en su actividad laboral y pasa a situación de jubilado, la pensión de jubilación sustituye al

⁵⁵SAP de Granada de 30 de Septiembre de 2001.

⁵⁶ SAP de Córdoba de 2 de marzo de 2006, SAP de Asturias de 11 de septiembre de 2006.

⁵⁷Ejemplo de ello es la SAP de Barcelona de 14 de marzo de 2006, que establece “No procede en el divorcio reducir la pensión de alimentos pactada a favor de los hijos en el Convenio de separación: el esposo continua trabajando en el mismo negocio que lo hacía durante el matrimonio, aunque ahora figure a nombre de su actual compañera, y manifiesta que cobra la misma cantidad que obtenga entonces”.

⁵⁸SAP de Málaga de 29 de Abril de 2010.

suelo que hasta ahora venía percibiendo y en la mayoría de los casos se producirá una reducción en los ingresos y si esta reducción de los ingresos es importante podría dar lugar a la correspondiente modificación de medidas. Además, en algunos casos, también se tiene en cuenta la situación de prejubilación, como en el caso de la sentencia de la SAP de las Palmas de 15 de febrero de 2001, ya que considera que dicha situación constituye una notable reducción de ingresos. No obstante la SAP de la Coruña de 18 de abril de 2001 no tiene en consideración dicha reducción de ingresos cuando la prejubilación es voluntaria⁵⁹.

D) Situaciones de incapacidad laboral.

La situación de incapacidad del progenitor obligado al pago supone un importante obstáculo para la obtención de ingresos y dependiendo del grado de la misma puede conllevar una drástica reducción de esa capacidad económica. Por el contrario, si se acredita que a pesar de percibir la pensión de incapacidad, viene manteniendo el mismo nivel de vida, esta situación no será motivo de reducción de los alimentos.

-El tercer requisito que se exige es que el cambio de circunstancias sea permanente, o al menos que no obedezca a una situación de carácter transitorio.

Referente a esta cuestión, encontramos diferentes sentencias que van definiendo que se entiende por circunstancias de carácter permanente. Así, la SAP de Madrid de 9 de julio de 2010 considero que no se trataba de una situación meramente coyuntural el hecho de que un padre hubiera perdido el empleo dos años antes pero sin que hubiera cambiado su estatus económico laboral.

-El cuarto requisito que se exige con carácter general para que proceda la reducción de la cuantía de la pensión de alimentos, es que las circunstancias alegadas sean ajenas a la voluntad del progenitor que solicita la modificación.

Por tanto, si las causas en las que se basa el progenitor para pedir la modificación han sido buscadas o provocadas voluntariamente por el progenitor que solicita la modificación, no procederá la modificación. Ejemplo de ello sería alegar en la demanda circunstancias como la baja laboral voluntaria, excedencia, o el

⁵⁹SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, *Relaciones paterno-filiales...*, op. cit., p. 229.

endeudamiento voluntario por la compra de bienes muebles e inmuebles⁶⁰. Encontramos respaldo jurisprudencial al respecto en la SAP de Valencia de 24 de enero de 2008, donde se consideró que la situación económica del progenitor procede únicamente de su voluntad, al dejar voluntariamente la empresa de la cual obtenía suficientes ingresos para pagar la pensión. También encontramos casos en los que aunque el cese de la relación laboral se produjo como consecuencia de un despido, se entendió que la situación de insolvencia fue buscada voluntariamente, como resalta el fallo de SAP de Málaga de 20 de Septiembre de 2006 y por la SAP de Madrid de 4 de marzo de 2006.

Sin embargo, a diferencia del criterio anteriormente mencionado, encontramos sentencias donde la SAP de Navarra de 4 de Julio de 2006 si tuvo en cuenta la reducción de ingresos causada por un cambio voluntario de destino. En este caso se consideró que la reducción no podía considerarse como caprichosa, ya que se trata de una circunstancia ajena al trabajador, ya que se insta el proceso de modificación de medidas al reducirse su salario por percibir un número menor de complementos en su función de Agente de la Policía Nacional por motivo del cambio de destino.

- El quinto requisito es que se acredite en forma por el cónyuge que solicita la modificación el cambio de circunstancias. No basta con alegar hechos que tengan la suficiente entidad para sustentar la modificación de medidas, sino que estos deberán probarse, usando para ello todos los medios de prueba admitidos en derecho y la carga de la prueba recaerá sobre el cónyuge que solicita la modificación⁶¹.

Para concluir, en caso de que se consideren probados los requisitos anteriores es necesario determinar también la cuantía que deberá tener. Llegados a este punto, es reiterada la jurisprudencia que establece que aunque los ingresos del progenitor se hayan reducido de forma muy importante, la pensión no puede reducirse por debajo de lo que se considera el mínimo vital, que sería un montante aproximado de 150 euros por hijo. Pero cuando aun a pesar de haberse reducido los ingresos del progenitor se pueda abonar una pensión superior al mínimo vital, es frecuente reducir la cuantía de la pensión en la misma proporción que se han reducido los ingresos del progenitor⁶².

⁶⁰Esto supondría conculcar lo establecido en el art. 1256 CC: “La validez y cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

⁶¹Art. 217 LEC.

⁶²Este criterio es seguido, entre otras, por la SAP de Pontevedra de 29 de Septiembre de 2011, la SAP de Cáceres de 14 de Diciembre de 2009 o la SAP de Sevilla de 12 de Diciembre de 2005.

4.2.2 Aumento de las necesidades del progenitor obligado al pago de la pensión.

- Por nueva descendencia:

Considera SERRANO CASTRO⁶³ que el nacimiento de nuevos hijos no comunes puede generar un conflicto de intereses, que deberá ser resuelto siempre desde la perspectiva del derecho a la Igualdad reconocido en el art 14 CE pues ni unos hijos ni otros pueden resultar en ningún caso perjudicados.

Por otro lado, PÉREZ MARTÍN⁶⁴ apunta que es casi unánime la opinión jurisprudencial que considera que el nacimiento de un nuevo hijo del deudor no debe alterar las pensiones de los hijos anteriores. Lo determinante no es el nacimiento de un nuevo hijo, sino la repercusión de esta circunstancia en la situación económica del progenitor obligado al pago, ya que solo se admite la modificación de medidas cuando el progenitor no tenga capacidad económica para atender a todas sus obligaciones alimenticias, cuando el otro progenitor de sus nuevos hijos carece de ingresos suficientes y cuando se trata de un hecho nuevo.

ORDÓÑEZ PÉREZ⁶⁵ mantiene también esta tesis, reforzada por sentencias como la SAP de Málaga de 12 de mayo de 2011, que establece que “En tales supuestos el nacimiento de un solo hijo no equivale a una disminución de la fortuna de quién es ya alimentante, ya que se el sustento de un hijo es una carga, lo importante será conocer el caudal o medios con los que cuenta la nueva unidad familiar”.

PÉREZ MARTÍN apunta que los tribunales en estos casos suelen tomar dos posturas: en primer lugar, la que rechaza que el nacimiento de un nuevo hijo fuera considerado como alteración sustancial de las circunstancias y la que sí considera que lo fuera⁶⁶. El argumento principalmente esgrimido para rechazar la disminución de la pensión por el nacimiento de un nuevo hijo, siendo esta la postura mayoritaria, se apoya en que la causa que motiva la alteración de las circunstancias debe ser ajena al progenitor que solicita la modificación. De este modo, al tratarse la formación de una nueva familia del deudor es un acto voluntario y libre, ello no puede acarrear un

⁶³ SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, “*Relaciones...* op. cit., p. 227.

⁶⁴ PEREZ MARTIN, Antonio Javier, “*La modificación...*”, op. cit, p.573.

⁶⁵ ORDÓÑEZ PEREZ, Ana Belén, “*La modificación...*”, op. cit., p. 65.

⁶⁶ PÉREZ MARTÍN, ANTONIO, “*La modificación...*”, op. cit., p. 575.

perjuicio económico a los hijos tenidos con la pareja anterior⁶⁷.

En contraposición, existe otra postura que admite que el nacimiento de un nuevo hijo sí altera sustancialmente las circunstancias, pues el aumento del número de beneficiarios constituye hecho nuevo que altera de forma importante la situación preexistente⁶⁸.

- Por nuevo matrimonio o relación convivencial: Una vez dictada una sentencia de divorcio o nulidad, cada uno tiene plena libertad para poder contraer nuevamente matrimonio⁶⁹. Sin embargo, este hecho por si solo nunca será causa suficiente para reducir el importe de la pensión alimenticia de los hijos de su anterior unión⁷⁰, pues se trata de un hecho voluntario que los hijos del anterior matrimonio no tienen por qué soportar ya que no hay que olvidar el art. 145 CC, del que se deduce que en el supuesto de que los alimentistas concurrentes fueran el cónyuge y un hijo sujeto a patria potestad, éste será preferido a aquél.

4.2.3 Aumento de ingresos del progenitor custodio.

Pueden darse las siguientes situaciones:

-Que el progenitor custodio acceda a un puesto de trabajo. En este supuesto, cuando se fijó el importe de la pensión alimenticia el progenitor custodio no desempeñaba ningún trabajo, por lo que la carga alimenticia se desplazó principalmente hacia el otro progenitor. Con la obtención de nuevo ingresos, el importe de la pensión alimenticia debe revisarse para que guarde la proporcionalidad que exigen los artículos 146 y 147 CC⁷¹.

Será irrelevante para la modificación de la pensión alimenticia, el hecho de que el progenitor custodia desempeñe trabajos esporádicos o temporales de escasa cuantía o

⁶⁷ Así, encontramos la SAP de Madrid de 1 de septiembre de 2004 señala que no procede reducir la cuantía de la pensión alimenticia al no constar una alteración sustancial de los ingresos del obligado y no ser causa para tal reducción el hecho de que haya nacido un nuevo hijo posterior en cuanto que es un hecho propio y libremente decidido.

⁶⁸ En esta línea, la SAP de Sevilla de 24 de febrero de 2006 dice que aunque la estabilidad profesional y situación económica no hayan variado, existe un aumento de sus obligaciones que justifican tal reducción.

⁶⁹ ABOGADOS WALKER, “Pensiones alimenticias y compensatorias: modificación y extinción”, en *Noticias jurídicas*, 1999.

⁷⁰ Así lo confirma la SAP de Córdoba de 20 de marzo de 2006.

⁷¹ Así lo determinó la SAP de Albacete de 19 de mayo de 2003: “Se reduce la pensión alimenticia que el padre debe pagar a los hijos, al estimarse la modificación sustancial de circunstancias en base a que la madre ha aprobado unas oposiciones de la Administración con mejor económica, y el padre ha empeorado al haber contraído nuevo matrimonio”.

se vea obligado a realizar trabajos por horas para poder atender las necesidades de la familia. Únicamente cuando la mencionada pensión haya sido fijada en un Convenio regulador se podría excluir la reducción de la pensión alimenticia por este motivo⁷².

-Que los ingresos que percibía el progenitor custodio experimenten un aumento sustancial. Dado el caso, debe acreditarse fehacientemente que el aumento ha sido de tal importancia que exija una revisión de la cuantía de la pensión, de lo contrario iríamos en contra del requisito de la sustancialidad que establecen los arts. 90 y 91 del CC. Por último, aunque conviva con el progenitor custodio una tercera persona, sobre la misma no recae ninguna obligación de carácter alimenticio y por tanto ese dato carecerá de relevancia a efectos de minorar la cuantía de la pensión alimenticia de los hijos a la que deben hacer frente exclusivamente los progenitores⁷³.

4.2.4 Cambio de convivencia de los hijos.

Cuando los hijos pasen a convivir con el progenitor que hasta el momento venía siendo obligado al pago de alimentos, las medidas adoptadas anteriormente quedan sin efecto y es necesaria la adopción de nuevas medidas. Supuestos que podemos encontrar:

-En primer lugar se puede dar el supuesto de que todos los hijos se vayan a convivir con el otro progenitor.

Puede suceder porque la guarda y custodia de todos los hijos del matrimonio o de la relación *more uxorio* sea atribuida al progenitor hasta el momento obligado al pago de la pensión de alimentos o en el caso de que los hijos sean mayores de edad pero aun dependientes económicamente, que estos decidan convivir con el otro progenitor. En ambos casos, respecto del progenitor que hasta el momento convivía con los hijos, deberá establecerse ahora una pensión alimenticia.

Si bien, en la práctica pueden plantearse problemas cuando este progenitor no cuente con ingresos, o sean escasos o provenientes de una pensión compensatoria o de un trabajo inestable. La solución que recogen los tribunales viene marcada por el hecho de que el progenitor que pide la atribución de la guarda y custodia de los hijos no

⁷² Así lo establecen las sentencias de la SAP de Málaga de 12 de julio de 2004 y la SAP de Huelva de 14 de marzo de 2006.

⁷³ La SAP de Valladolid de 14 de mayo de 2004 establece: “Se mantiene la pensión alimenticia para los hijos pues no puede afectar a su importe el hecho de que la madre conviva con otra persona, pues la obligación corresponde al padre, que puede prescindir de los gastos que alega pues los alimentos es una obligación jurídica prioritaria”.

incluye en el suplico de la demanda la fijación de dicha pensión, sin embargo cuando sí se realiza esta petición debe necesariamente ser resuelta.

-Cuando la custodia de los hijos estaba repartida entre ambos progenitores y los que permanecieran con un progenitor se van a vivir con el otro. Es evidente que el aumento de convivencia de hijos con un progenitor puede ser motivo de un incremento de la pensión alimenticia de estos o en la contribución a las cargas del matrimonio, sin embargo deberán también valorarse, los ingresos de ambos progenitores y las necesidades de los hijos.

-Por último, puede suceder que solo alguno de los hijos cambie de lugar de convivencia. Cuando se reduce el número de hijos que conviven con un progenitor, la pensión alimenticia deberá reducirse, pero se exige de nuevo la valoración de todas las circunstancias concurrentes para que pueda determinarse el importe de la reducción⁷⁴.

4.2.5 Disminución de las necesidades de los hijos.

Como regla general las necesidades de los hijos suelen ir en aumento, si bien existen situaciones puntuales en las que estas necesidades se reducen, lo cual puede comportar en ocasiones una modificación del importe de la pensión de alimentos⁷⁵.

4.2.6 Percepción de los ingresos por parte de los hijos mayores de edad.

Cuando los hijos empiezan a percibir ingresos, si la cuantía de estos ingresos es suficiente para cubrir las necesidades de los hijos, la pensión quedará extinguida. Sin embargo hasta que sean independientes económicamente es necesario que los progenitores sigan prestando alimentos.

Encontramos sentencias que no se aprecian que la modificación sea sustancial y por susceptible de reducir la pensión en el caso de que la hija trabaje durante el verano cuando además estudia fuera de su domicilio⁷⁶.

En contraposición hay resoluciones, como la SAP de Madrid de 14 de junio de 2005, que establecen una reducción de la pensión cuando las hijas desempeñan trabajos adicionales de forma estable a pesar de ser todavía dependientes económicamente y se

⁷⁴ Sobre esta cuestión se pronuncia, entre otras, la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 25 de octubre de 2004.

⁷⁵ Claro ejemplo de ello es la SAP de Sevilla de 24 de febrero de 2006, que establece: “Procede reducir el importe de la pensión de alimentos, al haberse acreditado una disminución de las necesidades de la menor por el hecho de haber abandonado la guardería infantil y pasado a un centro público gratuito.”

⁷⁶ Vid, SAP de Valencia de 13 de enero de 2005 o SAP de Córdoba de 18 de julio de 2003.

encuentren estudiando fuera del domicilio habitual.

4.3 Aumento de la cuantía de la pensión alimenticia.

La acción para instar una demanda de modificación para pedir un aumento de la cuantía se fundamenta en el art. 147 CC y los supuestos que permiten el aumento del importe de la pensión de alimentos son: el aumento de las necesidades de los hijos, que el obligado a satisfacer los alimentos hubiese incrementado su fortuna o que el progenitor custodio venga a peor fortuna. Sin embargo, estos supuestos no constituyen causas autónomas de aumento de la pensión sino que es necesario el cumplimiento de los requisitos que se exigen con carácter general⁷⁷.

4.3.1 Aumento de las necesidades de los hijos.

A pesar de que las pensiones alimenticias van acompañadas de una cláusula de revalorización, es evidente que conforme los hijos van alcanzando cierta edad se generan mayores necesidades económicas que pueden rebasar incluso las actualizaciones señaladas originariamente.

Para poder solicitar el aumento de la pensión alimenticia deben haber aumentado las necesidades ordinarias de los hijos, debiendo quedar al margen las necesidades extraordinarias (susceptibles de reclamación por su propio cauce). Como ya hemos mencionado anteriormente, la pensión alimenticia cubre exclusivamente las necesidades básicas y normales de los hijos (art. 142 CC en relación con el 154 CC). Esto es, todo aquello que se precisa para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción y, en definitiva, la formación integral del alimentista, todo ello conforme al status familiar.

Además, el aumento de la cuantía de la pensión alimenticia no puede estar fundado en necesidades genéricas, sino que habrá los gastos concretos justifican el aumento⁷⁸, siendo también necesario el cumplimiento de los requisitos generales⁷⁹.

⁷⁷PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación....”, op, cit, p.588.

⁷⁸En este sentido se pronuncia la SAP de Cuenca de 15 de mayo de 2002. Establece que “ No puede afirmarse de forma genérica y taxativa que las necesidades económicas de los hijos se incrementan necesariamente por el solo hecho de su crecimiento”.

⁷⁹ La SAP de Madrid de 20 de septiembre de 2002 expone que el hecho de que el menor padezca un retraso congestivo y un síndrome de hiperactividad infantil no constituye un hecho nuevo y desconocido antes de adoptarse las medidas y por consiguiente no es causa de aumento de la pensión alimenticia.

4.3.2. Aumento de los ingresos del obligado al pago de los alimentos.

Establece el art. 146 CC que “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe.”

Para que un incremento en los ingresos del obligado al pago pueda tener relevancia jurídica el aumento de los ingresos debe ser real, sustancial, permanente y además, no deberá ir acompañado de un aumento de las cargas el progenitor obligado al pago. Sin embargo, se trata de una cuestión muy discutida, si el solo hecho de que aumenten es razón suficiente para incrementar la cuantía de la pensión, o también es necesario que las necesidades de los hijos hayan aumentado o se hayan reducido los ingresos del progenitor custodio.

Sostienen la primera tesis sentencias como la SAP de Sevilla, de 11 de diciembre de 2002, que establece que “el aumento de la pensión alimenticia de los hijos al haber experimentado un aumento de sustancial los ingresos del padre, con independencia de que sus necesidades no hayan experimentado un evidente aumento, pues es suficiente con que uno solo de los factores se haya modificado sustancialmente”.

Igualmente encontramos sentencias que sustentan la segunda tesis, como la SAP de Castellón de 26 de enero de 2004, que considera que “el hecho de que el padre tenga unos ingresos mayores no justifica por si solo el incremento de la pensión alimenticia de la hija, ya que es necesario a su vez que las necesidades del menor sean superiores a aquellas tenidas en cuenta en su día cuando se estableció”.

4.3.3 Descenso de los ingresos del progenitor con el que conviven los hijos.

Que el progenitor con el que conviven los hijos haya perdido su puesto de trabajo, o se hayan reducido sustancialmente sus ingresos, supone un cambio sustancial que puede, en su caso, justificar un aumento en el importe de la pensión alimenticia de los hijos. A este respecto, encontramos sentencias que efectivamente estiman el aumento de la pensión alimenticia por concurrir las causas anteriormente citadas, como la SAP de Barcelona de 11 de mayo de 2004, pero también son muchas las sentencias que dictan lo contrario, como por ejemplo, la de la SAP de Cáceres de 4 de noviembre de 2004. Por tanto, la conclusión es que deberá en cada momento atenderse a las circunstancias concretas del caso.

4.4 Extinción de la pensión alimenticia.

Existen diversas causas de extinción de la pensión alimenticia, entre ellas:

4.4.1 Extinción de la pensión por obtención de ingresos por parte del hijo.

El artículo 152.3 CC incluye entre las causas de extinción el hecho de que el alimentante haya adquirido “un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia”. El precepto legal no indica ni la cuantía que debe recibir el hijo ni si el trabajo debe ser permanente o temporal, por tanto si realizamos un análisis jurisprudencial encontramos supuestos muy diversos:

-Que el hijo realice trabajos esporádicos o de temporada. La SAP de Barcelona de 18 de mayo de 2010 considera que es causa de extinción de la pensión alimenticia la incorporación del alimentista al mercado laboral⁸⁰. Esta misma audiencia, en sentencias posteriores, como la SAP de Barcelona de 17 de junio de 2014, determina que el acceso al mercado laboral, aunque sea con una retribución reducida o con contratos de trabajo temporales, es causa suficiente para extinguir la obligación de alimentos de un padre respecto de su hijo de 25 años de edad y en tales circunstancias de temporalidad laboral.

-Que después de haber estado trabajando durante cierto tiempo el hijo opte por terminar su formación a efectos de poder acceder a un puesto de trabajo para el que no cuenta con titulación. Este es el supuesto que recoge la SAP de Barcelona de 6 de octubre de 2004, que estableció la procedencia de suprimir las pensiones alimenticias a favor de las hijas mayores de edad, al constatar que contaban desde hacía algunos años con contratos indefinidos de trabajo, pero que deseaban continuar con sus estudios.

-O que haya adquirido un empleo de carácter fijo o perciba una pensión periódica, o cuando a pesar de haber estado trabajando actualmente se encuentra sin trabajo y sin percibir ningún tipo de ayuda por desempleo. La sentencia de 1 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº23 de Sevilla, consideró procedente la extinción en base a que el hijo mayor de edad “Desde 2012 no ha continuado su formación académica, pues dejó los estudios de Magisterio al quedarle dos asignaturas, mientras que, también manifestó que en el año 2009 trabajó y tuvo unos ingresos de 2.000 euros, en el año 2010 de unos 7.000 euros y actualmente se

⁸⁰ORDÓÑEZ PEREZ, Ana Belén, “La modificación... op. cit, p. 68.

encuentra sin trabajo y sin recibir ninguna ayuda por desempleo”.

4.4.2 Extinción de la pensión por encontrarse el hijo en disposición de trabajar.

Cuando los hijos entran en la etapa de acceso al mercado laboral, habrá que preguntarse si en esta etapa aún son acreedores de la pensión alimenticia que se fijó en el procedimiento matrimonial. Si el hijo que dejó los estudios o no los finalizó y no acredita que padezca limitación intelectual o física para trabajar, habrá que presumir que el motivo por el que no percibe ingresos es imputable a él mismo⁸¹(art 152.3 CC).

Si bien es cierto que, en la situación actual, es muy complicado el acceso a los jóvenes a un empleo. En este sentido, la SAP de Cáceres de 13 de marzo de 2012 hace una reflexión acerca de que los tribunales deben de ser sensibles con la realidad social actual (basándose en el art. 3.1 CC), donde la situación de profunda crisis económica y laboral, con una mas que notable dificultad de acceso al empleo, impide sobremanera el que personas con titulación académica y universitaria, puedan introducirse en el mercado laboral por causas que no son imputables al alimentista⁸².

4.4.3 Extinción de la pensión por falta de rendimiento escolar o falta de aplicación al trabajo.

De los supuestos analizados, se deduce que si no se acredita ninguna fracaso escolar de los hijos, la pensión alimenticia deberá mantenerse hasta que finalicen su formación. Por el contrario, si queda probado que los hijos mayores de edad no asumen sus obligaciones y por un bajo rendimiento sucesivamente no superan los cursos académicos en los que se matriculan, la pensión se podrá reducir e incluso suprimirse. En esta línea, SAP de Murcia de 31 de julio de 2013, en virtud del art. 152.5 del CC, estimó la demanda y dejó sin efecto la pensión alimenticia fijada a favor de la hija de la demandante, por entender concurrente la falta de aplicación y aprovechamiento de la alimentista de los estudios que realizaba.

También encontramos la SAP de Málaga de 19 de julio de 2012 : “La desidia del hijo de 26 años en la dedicación a los estudios que le permitirán trabajar supone el cese de la obligación de alimentos”. Situación similar resuelve la SAP de Valencia de 18 de

⁸¹ Así lo establecen la SAP de Madrid de 31 de octubre de 2002 y la SAP de Cádiz de 18 de febrero de 2003.

⁸² PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, y PÉREZ RUFIÁN, Laura, “La crisis económica...”, op., cit., p. 46.

julio de 2012: “Se acuerda la extinción de la pensión alimenticia a favor del hijo mayor de edad de 20 años, pues consta que ha dejado de estudiar sin que se sepa si trabaja o no, siendo situación a él imputable, mientras que el padre ha perdido su empleo”. Otro caso similar sería el recogido en la SAP de Málaga de 3 de mayo de 2011, donde un adolescente de 19 años deja un trabajo con signos de permanencia alegando que no quiere continuar trabajando⁸³.

4.4.4 Extinción de la pensión por contraer matrimonio el hijo.

Cuando un hijo ha contraído matrimonio, el deber de alimentos que pesa sobre el progenitor queda sin efecto, puesto que, cabe presumir que ha salido del domicilio familiar, vive en compañía y con medios económicos suficientes, bien propios o de su cónyuge. Además, es necesario mencionar que se altera el orden de prelación en la relación de alimentos a los parientes, como señala el art. 144 CC. Excepcionalmente, se ha mantenido la pensión alimenticia cuando el matrimonio del hijo tuvo una corta duración, como en el caso de la SAP de Asturias de 12 de marzo de 2003.

4.4.5 Extinción de la pensión por falta de convivencia del hijo con sus progenitores.

La fijación de alimentos a los hijos mayores de edad dentro del procedimiento matrimonial, está basado en criterios de convivencia en el domicilio familiar y falta de recursos propios, lo que constituye una excepción al régimen general de alimentos entre parientes, puesto que se condiciona tanto la fijación como el mantenimiento de la pensión a un criterio que no aparece en los art 142 y siguientes. Si el hijo mayor de edad, deja de convivir en el domicilio familiar, se plantea la duda de si será causa de extinción o no de la pensión alimenticia y el criterio mayoritario se inclina por considerarlo como causa de extinción, sin perjuicio de que el hijo inste un procedimiento de alimentos si se considera con derecho a una pensión alimenticia⁸⁴.

4.4.6 Extinción de la pensión por falta de ingresos del progenitor obligado al pago de los alimentos.

Conforme a lo establecido en el art. 152.2 CC, cesará también la obligación de dar alimentos cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto

⁸³ ORDÓÑEZ PÉREZ, Ana Belén, “*La modificación... op. cit*, p. 66.

⁸⁴ SAP de Madrid de 27 de junio de 2002, SAP de Vizcaya de 5 de julio de 2004, SAP de Valencia de 7 de junio de 2005.

de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia. Esta cláusula no es aplicable a los hijos menores de edad, pero si puede ser causa de suspensión, como analizamos más adelante, pero sí será de aplicación cuando el hijo haya alcanzado la mayoría de edad y los ingresos que percibe el progenitor no sean suficientes para satisfacer sus propias necesidades. Esta causa ha sido una de las alegadas con mayor frecuencia por efecto de la crisis.

4.4.7. Extinción de la pensión por cumplimiento de las cláusulas del Convenio regulador.

Como hemos mencionado anteriormente, cuando surge la crisis de pareja, los progenitores pueden optar por regular ellos mismos las consecuencias de la crisis mediante convenio. En estos casos es posible encontrar algún tipo de especialidad en la cláusula relativa a la pensión alimenticia de los hijos. Si esta cláusula fue aprobada judicialmente, surge la cuestión de si una vez cumplida la condición pactada, se extingue la pensión o por el contrario, se aplicaría el mismo régimen que al resto de pensiones alimenticias. Si analizamos la jurisprudencia que se pronuncia sobre esta cuestión, es posible encontrar resoluciones que siguen tanto la primera tesis⁸⁵ como la segunda⁸⁶.

4.4.8 Extinción al ser condenado el hijo por agredir al padre.

El art. 152 CC prevé como causa de extinción de la pensión alimenticia “Cuando el alimentista, sea o no heredero forzoso, hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a la desheredación”. Ciertamente es que no constituye una causa muy frecuente, si bien la jurisprudencia recoge algún caso, como la SAP de Granada de 20 de mayo de 2002, que estableció la “extinción de la pensión alimenticia del hijo mayor de edad en base a la condena por agresión o malos tratos del hijo hacia el padre.”

Además, aunque no se trate de un caso en el que se fijara condena por vía penal, la SAP de Málaga de 19 de julio de 2012 consideró, de conformidad con lo prevenido en el art. 152 del CC, declarar la cesación de alimentos al acreditarse que el hijo había agredido tanto física como verbalmente a sus padres, generando ello, un clima de convivencia insostenible.

⁸⁵SAP de Barcelona de 29 de enero de 2002, SAP de Baleares de 9 de febrero de 2002.

⁸⁶SAP de Jaén de 22 de enero de 2004.

4.5 Limitación temporal de la pensión alimenticia.

La mayoría de edad determina la plena capacidad de obrar y presupone la plena independencia tanto personal como patrimonial de los hijos. Pero, a pesar de esta afirmación, actualmente la independencia económica no resulta casi nunca posible desde el momento en que se alcanza la mayoría de edad. Por ello, es necesario cuestionarse hasta cuándo debe un padre mantener a un hijo.

Considera MARÍN GARCÍA DE LEONARDO⁸⁷, que “el problema es determinar hasta cuándo se está en una situación de necesidad y qué estudios están obligados a costear los padres”. La solución del Código Civil no es acorde con la situación actual, ya que ha dado lugar a multitud de abusos por parte de los hijos, situación que quedaría paliada si se impusiera un límite temporal.

Por su parte, ROGEL VIDE califica los alimentos debidos por sus progenitores a un menor de edad como de mayor vigor respecto de los del art. 142 CC⁸⁸. Sin embargo cuando estos alcanzan la mayoría de edad, pierde tal carácter y su percepción se condiciona a que el hijo los necesite. Hay que precisar que en el CC no se pone ningún límite temporal para tener derecho a una pensión alimenticia, dado que lo determinante es si esa persona, por causa no imputable a él tiene o no necesidades alimenticias⁸⁹. Por ejemplo, la SAP de Vizcaya de 17 mayo de 2002 establece que no procede limitar temporalmente la pensión alimenticia de un hijo que padece Síndrome de Down.

Encontramos dos tipos de resoluciones judiciales:

-Aquellas que establecen que no se puede fijar un límite temporal a la obligación económica, ya que consideran que los alimentos se deben seguir prestando mientras se mantengan las circunstancias que han servido de base para su concesión.

-Sin embargo, también encontramos otra línea jurisprudencial que considera que cuando concurran ciertas circunstancias, podrá acordarse un límite temporal a la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad, en virtud del art. 152.5 CC, que establece, que cesará la obligación de alimentos cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de

⁸⁷MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Teresa, “La temporalidad de los alimentos...”, op. cit., p. 20.

⁸⁸ROGEL VIDE, Carlos, *Alimentos y auxilios necesarios para la vida*, Colección Claves de Jurisprudencia, Editorial Reus, 1ª ed., 2012, Madrid.

⁸⁹PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, y PÉREZ RUFIÁN, Laura, “La crisis económica...”, op., cit., p. 44.

falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa.

Una cuestión suscitada es si esa obligación alimenticia debe mantenerse en el marco del proceso de divorcio de sus padres o por el contrario pasado un determinado espacio temporal, será necesario que el hijo inste un procedimiento independiente de alimentos frente a ambos progenitores reclamando la pensión alimenticia. Es necesario mencionar que la crisis económica que venimos sufriendo desde hace algunos años, ha incidido en esta cuestión, provocando que los jóvenes accedan mucho más tarde a un empleo estable y que en muchas ocasiones continúen manteniendo su residencia habitual en el domicilio familiar hasta edades muy tardías⁹⁰. Esta situación es muy tenida en cuenta por los juzgados y tribunales, entendiéndose que no se puede establecer un límite temporal a la pensión de alimentos porque no tiene un carácter indemnizatorio y está condicionada únicamente a las necesidades del alimentista y a las posibilidades del alimentante⁹¹. De hecho, cada vez son más los juzgados los que recogen en sus resoluciones la fijación de un límite temporal para percibir la pensión de alimentos. Ejemplo de ello es la SAP de Soria de 5 de diciembre de 2012, que establece que “La obligación alimenticia de los hijos mayores de edad no puede tener carácter incondicional e ilimitado temporalmente por lo que se extinguirá cuando la hija alcance la independencia económica o bien cuando cumpla 25 años”.

En conclusión, el hecho de no fijar en la sentencia de separación o de divorcio un límite a la pensión de alimentos supone que en ocasiones el progenitor obligado al pago se vea necesariamente inmerso en un proceso judicial para eliminar la pensión del hijo, cuando en ocasiones es posible prever cuándo el hijo dejará de necesitar del subsidio del progenitor, o cuándo estará en condiciones de hacerlo sin generar *existencias parasitarias*⁹² ya desde el proceso matrimonial.

4.6 La suspensión de la pensión alimenticia.

La obligación de prestar alimentos se mantiene hasta que el alimentante es independiente económicamente o pueda serlo⁹³. Pero cuando el progenitor obligado a prestar alimentos a sus hijos deja temporalmente de obtener ingresos y se encuentra en

⁹⁰PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier y PÉREZ RUFIÁN, Laura, “La crisis económica...”, op. cit., p. 45.

⁹¹SAP de León de 25 de Mayo de 2012.

⁹²CABEZUELO ARENAS, Ana Laura, *La limitación temporal de la pensión compensatoria en el Código Civil. Estudio jurisprudencial y doctrinal*, Aranzadi, 2002, p. 57.

⁹³ORDÓÑEZ PEREZ, Ana Belén, “La modificación... op. cit, p. 70.

una situación de imposibilidad de dar cumplimiento a la obligación es posible que pueda ser suspendida.

Cuando la situación de falta de ingresos es transitoria, se desestimaría automáticamente la petición de reducción o extinción de la obligación, sin embargo existe la posibilidad de solicitar la suspensión hasta que el progenitor vuelva a obtener ingresos. Además, tenemos que distinguir si se pide la suspensión de una pensión alimenticia cuando el hijo beneficiario sea menor o mayor de edad. Así se desprende, entre otras, de la STS de 12 de febrero de 2015 que dice lo siguiente: “De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE, y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico (SSTS de 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013). De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención”.

Por tanto, *cuando los hijos son menores de edad* la pensión alimenticia nunca puede extinguirse, aunque se acredite fehacientemente que el progenitor no percibe ningún tipo de ingresos, pero sí suspenderse. En relación a esto, encontramos sentencias como la STS de 24 de noviembre de 2008, en la cual se dicta la procedencia de declarar en suspenso la pensión alimenticia establecida en favor de una menor durante el tiempo en que la menor percibiera una beca por la Federación Española de Gimnasia⁹⁴. La sentencia menciona que la obligación de prestar alimentos a los hijos menores subsiste de manera incondicional en el caso de que el hijo tenga sus necesidades cubiertas por sus propios medios, pero ello no significa que cuando el menor tenga ingresos propios que le permitan cubrir sus necesidades, como sucedía en el caso, pueda suspenderse la pensión de alimentos durante el tiempo en que se mantuvieran dichas circunstancias.

Sin embargo, encontramos sentencias como la SAP de Murcia de 29 de Septiembre de 2011, que deniega la suspensión de la pensión, dado que la solicitud se basaba, no en la existencia de medios propios del menor, sino en la imposibilidad del

⁹⁴ORDOÑEZ PEREZ, ANA BELÉN, “La modificación... op. cit, p. 72.

deudor por carecer de empleo⁹⁵.

En el caso de los hijos mayores de edad, la situación varía, ya que la petición se analiza desde la óptica de los artículos 146 y 147 CC. Por consiguiente, puede mantenerse o reducirse su cuantía cuando los hijos se encuentran aún en periodo de formación y disminuyen drásticamente los ingresos del progenitor, pero también extinguirse cuando el padre no percibe ingresos.

Por otro lado, entre las Audiencias Provinciales parece existir cierta controversia en los casos en que el progenitor no custodio se encuentra en una situación de verdadera penuria, indigencia, insolvencia económica y carencia de recursos económicos, que hagan imposible no solo atender el cumplimiento de la obligación alimenticia sino incluso atender sus propias necesidades. Hablaríamos de casos en que las necesidades propias del alimentante deben ser cubiertas por aquellas personas que por disposición legal deben hacerlo. Esta situación se ha vuelto mas frecuente con la crisis económica, y el criterio de la mayoría de las Audiencias Provinciales, sería considerar que existe la posibilidad de la suspensión de la obligación de prestar alimentos.

A pesar de este criterio mayoritario, existen algunas otras resoluciones de Audiencias, más rigurosas y exigentes, que no están por la labor de suspender la obligación de alimentos, aunque se acredite que el progenitor no custodio se encuentre en situación de desempleo sin percibir ayudas públicas, siempre que se constate que está en edad laboral y tiene capacidad para el trabajo y aptitud para la obtención de ingresos. Fijándose en tales casos, una pensión que cubra siquiera las necesidades más imprescindibles.

Por otro lado, la STS de 2 de marzo de 2015 se pronuncia sobre el denominado "mínimo vital", en los supuestos en los que existen dificultades económicas para el pago de las pensiones de los hijos. Establece dicha sentencia, que lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo, que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su

⁹⁵Dice la citada sentencia que "Idéntica suerte desestimatoria cabe atribuir asimismo al siguiente motivo de apelación relativo a la cuantía de la pensión de alimentos. Se alega por el recurrente, como fundamento de su pretensión, que se encuentra en situación de desempleo, por lo que solicita la suspensión de tal medida o en su caso su fijación en 100 euros mensuales".

origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante.

Reitera la sentencia el carácter muy excepcional de la situación, pues el criterio general es velar por el interés superior del menor, que se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad, de hacerlo conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento. Ahora bien, se considera que la falta de medios determina otro “mínimo vital”, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil.

En conclusión, el Tribunal Supremo, a través de la referida STS de 2 de marzo de 2015, en aplicación de doctrina de las SSTs de 19 de enero y 12 de febrero de 2015, establece que la solución legal para los casos de progenitores que se encuentran en situación de carencia de medios y recursos económicos, ha de ser la extinción o suspensión de la obligación, pero teniendo en cuenta que dicha suspensión será:

-De naturaleza muy restringida y excepcional: debe acreditarse fehacientemente una situación de verdadera insolvencia económica o pobreza absoluta por parte del progenitor alimentante, cuyas necesidades han de ser, incluso, cubiertas por aquellas personas que por disposición legal deben hacerlo.

-De naturaleza temporal: ante la más mínima presunción de obtención de ingresos, deberá instarse un nuevo procedimiento de modificación de medidas.

4.7 Modificación del sistema de cuantía de la pensión.

Aunque la tendencia actual consiste en establecer una cantidad fija a la que se aplicarán las correspondientes actualizaciones, también es posible encontrar convenios reguladores o resoluciones judiciales, en las que la cuantía se fijó en base a un porcentaje de los ingresos que percibía el progenitor. Este sistema puede ser válido cuando el progenitor obligado al pago es un trabajador por cuenta ajena, pero plantea muchas dificultades en el caso de que sea trabajador por cuenta propia, ya que en algunos casos se ha detectado la supresión encubierta de la pensión alimenticia. La existencia de estos desajustes motiva la necesaria presentación de la demanda de modificación de medidas, con el fin de que se establezca una cantidad fija, a la cual se

aplicaría el correspondiente índice de actualización⁹⁶.

4.7.1 Modificación de la cláusula de gastos extraordinarios.

CABEZUELO ARENAS⁹⁷ y SERRANO CASTRO⁹⁸ establecen, que aunque en principio el importe de la pensión alimenticia está destinado al pago de los gastos normales que puede generar el hijo por habitación, alimentación, vestido, enseñanza, etc., sin embargo, es posible encontrar convenios en los que aparte de la pensión alimenticia el progenitor no custodio asume el pago de los gastos extraordinarios. Pero siempre que se trate de gastos excepcionales, imprevisibles, no periódicos, necesarios y que resulten acomodados a las circunstancias económicas de ambos progenitores.

Pero puede resultar que con el paso del tiempo, resulten cláusulas demasiado gravosas, puesto que una autorización genérica y sin limitaciones sobre los gastos extraordinarios⁹⁹, podría generar un grave desequilibrio económico para el progenitor que debe hacer frente a estos gastos. Por tanto, el posible empeoramiento que haya experimentado la economía de los progenitores, exige que todo gasto extraordinario sea previamente pactado entre ambos, circunstancia que se va a conseguir a través de la modificación de medidas, según establece PEREZ MARTÍN¹⁰⁰.

4.7.2 Modificación de la forma de prestar los alimentos.

El art. 149.1 CC permite que los alimentos debidos a los hijos puedan satisfacerse, bien pagando la pensión que se fije o bien recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos¹⁰¹. Sin embargo, establece el párrafo segundo de este mismo artículo, que esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista, por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor de edad. Por su parte, la jurisprudencia establece que la facultad de opción del art 149 CC no es tan absoluta que impida

⁹⁶ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación....”, op, cit, p.601.

⁹⁷ CABEZUELO ARENAS, Ana Laura, “Polémicas Judiciales sobre Significado, Fijación Contenido y Variabilidad de la Pensión de Alimentos...”, op. cit., p 119.

⁹⁸ SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, “Relaciones....”, op. cit., p. 197.

⁹⁹ Acerca de los gastos extraordinarios, vid. CARPI MARTÍN, REBECA, “Los gastos extraordinarios en las pensiones de alimentos a los hijos: un análisis jurisprudencial”, *Diario La Ley*, t. 5, 2009, p. 1315-1324; GONZÁLEZ DEL POZO, Juan Pablo, “La ejecución forzosa por gastos extraordinarios en los procesos de familia tras la reforma introducida por la nueva regla 4a del art. 776 de la LEC”, *Diario La Ley*, t. 5, 2009, p. 1634-1646.

¹⁰⁰ PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación....”, op, cit, p.602.

¹⁰¹ HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, “De los alimentos....”, op., cit., p. 271.

apreciar casos en que puedan existir causas justificadas de orden moral (falta de contacto entre ambos, enemistad manifiesta...) que se opongan a que el alimentista se traslade al domicilio del alimentante¹⁰².

4.7.3 Modificación del índice de actualización.

En el momento de acordar la pensión que deben recibir los hijos, se fijan, bien por los interesados o bien judicialmente, las bases para proceder a su actualización, en consonancia con los artículos 90, 97, 100 y 103 CC¹⁰³.

Es muy usual fijar como índice para la actualización de la pensión alimenticia, el incremento que anualmente experimente el IPC, que periódicamente publica el INE. Si bien, se aprecia que el salario de los trabajadores puede no aumentar en la misma proporción que lo hace el IPC. Este hecho puede traer como consecuencia que en un momento dado, la pensión alimenticia no guarde la misma proporción que existía en el momento de su fijación respecto a los ingresos del alimentante, situación que puede llevar al progenitor a interponer una demanda de modificación de medidas con el fin de sustituir el índice de actualización de la pensión por el incremento real que experimentan sus ingresos. Para que se admita la demanda se debe probar:

-En primer lugar, que en los años anteriores a la fecha en que se adoptaron las medidas, el sueldo del alimentante se iba incrementando, al menos, conforme al IPC.

-En segundo lugar, será necesario acreditar un cambio en esa tendencia anterior consolidada durante algunos años; además de todos los ingresos que perciba el alimentante y los IPC correspondientes al período que se alega.

Pese a ello, existen muchas resoluciones que no acceden a la modificación del índice cuando se trata de hijos menores de edad, pues consideran que el aumento de las necesidades de estos aumentan en mayor medida que el IPC.

4.8 Garantías para el cumplimiento de la obligación

Los art. 90 y 97 CC establecen que el juez podrá establecer las garantías que procedan, no siendo en la práctica muy habituales, excepto en el caso de que exista un temor fundado de que la parte deudora no vaya a cumplir con la obligación. El juez

¹⁰²Sobre esta cuestión se pronuncia la SAP de Granada de 13 de julio de 2002, SAP de Vizcaya, de 1 de octubre de 2004 y SAP de Málaga de 29 de diciembre de 2005.

¹⁰³SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, "Relaciones ...", op. cit., p. 218.

podrá estimar las medidas de garantía que considere oportunas, siendo las más comunes la retención del salario o percepciones del obligado al pago, la formalización de un aval o algún tipo de penalización como intereses de demora¹⁰⁴.

4.9 La irretroactividad de la sentencia de modificación de medidas.

En cuanto a la determinación inicial de la prestación de alimentos, deviene exigible desde el momento en que concurren los presupuestos legales: vínculo de parentesco, posibilidad del obligado a prestarlo y estado de necesidad del alimentista¹⁰⁵. Sin embargo, el abono de la deuda de alimentos no se haría desde la constatación del estado de necesidad, sino desde la interposición de la demanda, lo que no quiere decir que el cumplimiento de la obligación no pueda producirse de forma voluntaria. Luego, únicamente cuando el deudor no los preste voluntariamente, el inicio del cumplimiento forzoso de la obligación dependerá de la interposición de la demanda¹⁰⁶.

Pero la doctrina jurisprudencial del TS establece una distinción entre las resoluciones que fijan la pensión en respuesta a la primera reclamación de alimentos, cuyos efectos se retrotraen a la interposición de la demanda y las resoluciones sucesivas que la modifican, eficaces desde que se dicten en sustitución de las anteriores¹⁰⁷.

El TS considera que respecto del momento en que la pensión se instaura por primera vez, debe aplicarse la regla contenida en el art. 148.1 CC, de modo que los alimentos deben prestarse por el progenitor deudor, desde el momento de la interposición de la demanda¹⁰⁸. Sin embargo, cuando ya se ha fijado una pensión de alimentos y lo que se discute es la modificación de la cuantía, (como se ha reiterado en la STS de 3 de octubre de 2008), sobre esta cuestión se aplica el artículo 106 CC que viene a decir: “Los efectos y medidas previstos en este capítulo terminan, en todo caso, cuando sean sustituidos por los de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo” y también el art 774.5 LEC “Los recursos que, conforme a la ley, se interpongan contra la sentencia, no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieren acordado en ésta (...)”.

¹⁰⁴ SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, “Relaciones... op., cit., p. 221.

¹⁰⁵ El art. 148.1 CC establece que la obligación de alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos.

¹⁰⁶ Autores citados por HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, “De los alimentos... op., cit., p. 269

¹⁰⁷ STS núm. 162/2014 de 26 de Marzo.

¹⁰⁸ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves: “Alimentos para hijos menores. Devengo de la prestación cuando se reclaman en un proceso judicial por ruptura de relaciones entre sus progenitores. Aplicación del artículo 148.1 del Código Civil”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, nº 89, 2012. p. 153.

En conclusión, la doctrina fijada por el TS acerca de esta cuestión es la siguiente: “Cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podría imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, ya que hasta ese momento no estaba determinada la obligación y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicta, momento en que se sustituyen a las dictadas anteriormente.”¹⁰⁹

¹⁰⁹ Se reitera en la STS de 26 de octubre de 2011 y en la STS de 19 de noviembre de 2014.

5. CONCLUSIONES.

PRIMERA.- La obligación alimenticia es aquella relación jurídica por la cual una persona se encuentra obligada a prestar a otra lo necesario para su subsistencia. El concepto de alimentos responde a criterios objetivos y comprende un conjunto de prestaciones que no solo están encaminadas a satisfacer necesidades físicas, sino también necesidades de orden espiritual, imprescindibles para el desarrollo de la persona. Existe una línea divisoria que separa el derecho de alimentos que corresponde a los hijos menores de edad y que deviene del hecho de la filiación, (arts. 110 y 111 de la Constitución), de la figura de los alimentos entre parientes de los arts. 142 y ss. del CC, donde se encuadra el derecho de alimentos de los hijos mayores de edad que todavía conviven en el hogar familiar.

Pero, pese a la detallada regulación existente en el CC, en la práctica, la obligación de alimentos suele quedar limitada a los supuestos de crisis conyugales, en los que se solicita al cónyuge no custodio, que abone una pensión de alimentos para el sustento y manutención de los hijos comunes, cuya guarda y custodia es atribuida al otro progenitor, en el caso de que sean menores de edad.

SEGUNDA.-Respecto a la función que cumple en la sociedad actual la pensión de alimentos a los hijos, cabe decir, que la pensión de alimentos está pensada para satisfacer las necesidades vitales del alimentista. El concepto de las necesidades básicas del hijo es un concepto jurídico indeterminado, variable en función de las circunstancias y destinado a procurar lo indispensable para su sustento. En cuanto a los menores, es necesario compatibilizar el interés superior del menor y a su vez mantener la función originaria de la pensión de alimentos de procurar lo indispensable para su sustento. Por ello, es muy importante la ponderación del juez de las necesidades concretas del menor que se pretenden satisfacer mediante la concesión de una pensión de alimentos.

TERCERA.- Tras el surgimiento de una crisis de pareja, se deberán adoptar las medidas encaminadas a regular en el futuro las relaciones personales, patrimoniales y

paternofiliales. Es posible, que transcurrido un tiempo de esta fijación inicial, se produzca un cambio de circunstancias que motiven la modificación de estas medidas definitivas y para que efectivamente puedan modificarse tiene que haber tenido lugar un cambio sustancial, permanente, imprevisible e involuntario respecto del demandante en el conjunto de las circunstancias tenidas en cuenta al tiempo de adoptarse las medidas.

CUARTA.- La actual crisis económica está teniendo una influencia directa en los procedimientos de familia y todos los aspectos que del mismo pueden derivarse. Los casos de modificación de medidas han aumentado ya que muchos progenitores se han visto obligados a solicitar una reducción de la pensión de alimentos, alegando que se ha producido una variación sustancial en las circunstancias que dieron lugar a la interposición de la misma, por diversos motivos que pueden ser, desde la reducción del salario que venían percibiendo hasta la pérdida definitiva del empleo. Aun así, no se trata de situación en absoluto inhabitual y ya ha sido contemplada por la jurisprudencia y doctrina en épocas anteriores, si bien, en la actualidad se trata de una situación muy notoria en la actividad cotidiana de los tribunales.

Sin embargo, es importante destacar que a pesar de que alguien se encuentre en situación de desempleo, no por ello la solicitud de extinción de la pensión de alimentos al hijo menor de edad va a prosperar. La jurisprudencia entiende que hay un mínimo vital para que un hijo perciba alimentos, por lo que con carácter general no se podrá acordar su extinción a pesar de que la situación económica del obligado al pago sea precaria, ya que siempre debe prevalecer el interés del menor frente a las necesidades del progenitor.

QUINTA.- Con motivo de la recesión económica, es cierto que los jóvenes cada vez encuentran más difícil su incorporación al mundo laboral, pero a pesar de ello debería modificarse el Código Civil en el sentido de limitar temporalmente las pensiones de alimentos debidas a los hijos. Tanto por razones de economía procesal como para conseguir paliar el efecto perjudicial que crea en el hijo la seguridad de saber que va a recibir mensualmente la pensión, que hace que en ocasiones desaproveche los medios puestos a su alcance, apoyado por la comodidad del entorno familiar.

SEXTA.- Según el art. 148.1 CC, los alimentos, si son reclamados judicialmente serán abonados desde la fecha en que se interponga la demanda. Sin embargo, esta regla ha suscitado dudas respecto en relación con las resoluciones posteriores de modificación de medidas. Finalmente, la doctrina del Tribunal Supremo establece que la modificación

surtirá efecto únicamente desde el momento en que se acuerda en sentencia. Algo lógico y necesario, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica, puesto que en muchos casos, si se fijara el abono de la nueva cuantía de la pensión de alimentos desde el momento de interposición de la primera demanda, significaría beneficiar al cónyuge que hubiera visto satisfecha su reclamación de disminución de la cuantía y perjudicar al cónyuge a quien se le imponga un aumento en la cuantía.

SÉPTIMA.- En definitiva, cada proceso de modificación de medidas afecta a un conjunto de personas unidas por relación de parentesco, entre las que existen o han existido fuertes vínculos afectivos, quienes después de largos procesos verán estimadas o no sus pretensiones en una sentencia, y donde los jueces deben tener muy en cuenta los cambios sociales y económicos que se están produciendo, así como hacer gala de una especial sensibilidad en el caso de los menores y sus necesidades, pues es necesario tener siempre presente el interés superior del menor y velar por el correcto desarrollo de su personalidad.

7. BIBLIOGRAFÍA.

ABOGADOS WALKER, “Pensiones alimenticias y compensatorias: modificación y extinción”, en *Noticias Jurídicas*, 1999.

ANDRÉS JOVEN, Joaquín María, “Modificación de las medidas definitivas”, *Tratado de Derecho de Familia: aspectos sustantivos y procesales: adaptado a las Leyes 13/2005 y 15/2005*, Sepín, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2005. p. 890-945.

BELTRÁN DE HEREDIA Y ONIS, P., *La obligación legal de alimentos entre parientes*, Universidad de Salamanca, 1958.

CABEZUELO ARENAS, Ana Laura, *La limitación temporal de la pensión compensatoria en el Código Civil. Estudio jurisprudencial y doctrinal*, Aranzadi, 2002.

CABEZUELO ARENAS, Ana Laura, *Polémicas Judiciales sobre Significado, Fijación Contenido y Variabilidad de la Pensión de Alimentos de los Hijos tras la Separación y Divorcio (art. 93 CC)*, 1a ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2010.

CARPI MARTÍN, Rebeca, “Los gastos extraordinarios en las pensiones de alimentos a los hijos: un análisis jurisprudencial”, *Diario La Ley*, t. 5, 2009, p. 1315- 1324-

COBACHO GÓMEZ, José Antonio, *La deuda alimenticia*, Montecorvo, Madrid, 1990.

DÍEZ PICAZO, LUIS y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil, IV, Derecho de familia, Derecho de sucesiones*, 10a ed., Tecnos, Madrid, 2008.

GONZÁLEZ DEL POZO, Juan Pablo, “La modificación de medidas”, en *Los procesos de familia: una visión judicial: compendio práctico de doctrina y jurisprudencia sobre los procesos de familia y menores*, (Coordinador Hijas Fernández), Colex, Madrid, 2007.

GONZÁLEZ DEL POZO, Juan Pablo, “La ejecución forzosa por gastos extraordinarios en los procesos de familia tras la reforma introducida por la nueva regla 4a del art. 776 de la LEC”, *Diario La Ley*, t. 5, 2009, p. 1634-1646.

HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel, “De los alimentos entre parientes”, *Las relaciones paterno-filiales, filiación tutela, guarda, adopción y alimentos entre parientes*, Cuaderno III, Cuadernos teóricos Bolonia, Dykinson, (Director Francisco Lledó Yagüe y coordinador Oscar Monje Balsameda), 2012, p. 243-278.

LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís, *Elementos de Derecho Civil, IV, Derecho de Familia*, Librería Bosch, Barcelona, 1982.

MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Teresa, “Derecho de familia, crisis económica y mediación”, en *Mediación en el ámbito civil, familiar, penal e hipotecario: cuestiones de actualidad*, (coord. A. Ortega Giménez y M^a E. Cobas Cobiella), Difusión Jurídica, Madrid, 2013.

MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, Teresa, “El favor progenitoris en relación con los hijos mayores de edad”, *Aranzadi civil*, t. 10, v. 1 (2001), p. 1997-2011.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves: “Alimentos para hijos menores. Devengo de la prestación cuando se reclaman en un proceso judicial por ruptura de relaciones entre sus progenitores. Aplicación del artículo 148.1 del Código Civil”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, nº 89, 2012 (págs 153-172).

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, *La obligación de alimentos entre parientes*, La Ley, 1ª ed., Las Rozas, Madrid, 2002.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Nieves, “Legitimación para reclamar alimentos a favor de hijos mayores”, en *Actualidad Civil*, La Ley, Las Rozas, Madrid, 2008. p. 590-600.

MORENO MOZO, Fernando, *Cargas del matrimonio y alimentos*, Comares, Granada, 2008.

ORDOÑEZ PÉREZ, Ana Belén, “La modificación de medidas tras la separación y divorcio”, *Editorial Ley 57*, 2012.

PADIAL ALBÁS, Adoración, *La obligación de alimentos entre parientes*, Editor J. M. Bosch, Barcelona, 1997.

PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, *La modificación y extinción de las medidas. Aspectos sustantivos y procesales*, Vol. IX, Lex Nova, Madrid, 2007.

PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier y PÉREZ RUFIÁN, Laura, “La crisis económica y la pensión alimenticia”, *Revista de derecho de Familia*, Lex Nova, Thomson Reuters, Madrid, 4º trimestre de 2012, Año XIV, p. 25-46.

RIBOT IGUALADA, Jordi, *Alimentos entre parientes y subsidiaridad de la protección social*, Tirant lo Blanch, Valencia 1999.

ROGEL VIDE, Carlos, “Crisis económica y solidaridad familiar. Los alimentos entre parientes”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 4, 2012, p. 581- 597.

SANCHEZ ROMAN, Felipe. *Estudios de Derecho Civil*, Tomo V. 2ªED, Madrid, 1912.

SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, “Aspectos procesales de la reclamación de los alimentos de los hijos mayores de edad dentro del procedimiento matrimonial. Especial referencia a la nueva LEC y a la STS de 24 de abril de 2000”, *Revista de Derecho de familia*, núm. 9 (octubre de 2000), p. 53-68.

SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, *Efectos de la crisis económica en la fijación de las pensiones alimenticia y compensatoria*, El Derecho, 2001.

SERRANO CASTRO, Francisco de Asís, *Relaciones paterno-filiales*, El Derecho, Madrid, 2001.

ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Luis, “¿Hasta cuándo los padres tienen que alimentar a sus hijos?” *Economist and Jurist*, núm. 131, junio de 2009, p. 36 y siguientes.

8. JURISPRUDENCIA

Sentencias del Tribunal Supremo

STS de 5 de octubre de 1993

STS de 3 de octubre de 2008

STS de 24 de noviembre de 2008

STS de 15 de junio de 2011

STS de 26 de octubre de 2011

STS de 3 de noviembre de 2011

STS de 27 de noviembre de 2011

STS de 8 de noviembre de 2012

STS de 8 de noviembre de 2013

STS de 26 de marzo de 2014

STS de 19 de noviembre de 2014

STS de 19 de enero de 2015

STS de 12 de febrero de 2015

STS de 2 de marzo de 2015

Sentencias de Audiencias Provinciales

SAP de Barcelona de 24 de noviembre de 1995

SAP de Barcelona de 11 de diciembre de 1995

SAP de Barcelona de 22 de enero de 1996.

SAP de Madrid de 24 de mayo de 1996

SAP de Palma de Mallorca de 12 de mayo de 1997

SAP de Barcelona de 6 de abril de 1998

SAP de Albacete de 10 de julio de 1998

SAP de Palma de Mallorca de 16 de noviembre de 1998

SAP de Palma de Mallorca de 26 de enero de 1999

SAP de Ciudad Real de 25 de enero de 2000

SAP de Almería de 9 de junio de 2000

SAP de Alicante de 26 de octubre de 2000.

SAP de las Palmas de 15 de febrero de 2001

SAP de la Coruña de 18 de abril de 2001

SAP Navarra de 20 de Septiembre de 2001

SAP de Granada de 30 de Septiembre de 2001.

SAP de Barcelona de 29 de enero de 2002

SAP de Baleares de 9 de febrero de 2002

SAP de Baleares de 9 de mayo de 2002

SAP de Cuenca de 15 de mayo de 2002

SAP de Vizcaya de 17 mayo de 2002

SAP de Granada de 20 de mayo de 2002

SAP de Navarra de 27 de mayo de 2002

SAP de Madrid de 27 de junio de 2002

SAP de Granada de 13 de julio de 2002

SAP de Madrid de 20 de septiembre de 2002

SAP de Madrid de 31 de octubre de 2002

SAP de Sevilla, de 11 de diciembre de 2002

SAP de Cádiz de 18 de febrero de 2003

SAP de Asturias de 12 de marzo de 2003

SAP de Albacete de 19 de mayo de 2003

SAP de Córdoba de 18 de julio de 2003

SAP de Valencia de 11 de septiembre de 2003

SAP de Cádiz de 18 de septiembre de 2003

SAP de León de 27 de noviembre de 2003

SAP de Jaén de 22 de enero de 2004

SAP de Castellón de 26 de enero de 2004

SAP de Barcelona de 11 de mayo de 2004

SAP de Valladolid de 14 de mayo de 2004

SAP de Vizcaya de 5 de julio de 2004

SAP de Málaga de 12 de julio de 2004

SAP de Madrid de 1 de septiembre de 2004

SAP de Madrid de 13 de septiembre de 2004

SAP de Navarra de 20 de septiembre de 2004

SAP Barcelona de 29 de septiembre de 2004

SAP de Vizcaya, de 1 de octubre de 2004

SAP de Barcelona de 6 de octubre de 2004

SAP de Santa Cruz de Tenerife de 25 de octubre de 2004

SAP de Cáceres de 4 de noviembre de 2004.

SAP de Murcia de 17 de diciembre de 2004

SAP de Valencia de 13 de enero de 2005

SAP Alicante de 31 de enero de 2005

SAP de Ciudad Real de 15 de Febrero de 2005

SAP de Valladolid de 28 de febrero de 2005

SAP de Sevilla de 12 de Diciembre de 2005

SAP de Cádiz de 30 de enero de 2006

SAP de Sevilla de 24 de febrero de 2006

SAP de Huelva de 14 de marzo de 2006

SAP de Córdoba de 20 de marzo de 2006.

SAP de Sevilla de 24 de febrero de 2006

SAP de Valencia de 7 de junio de 2005

SAP de Madrid de 14 de junio de 2005

SAP de Málaga de 29 de diciembre de 2005

SAP de Córdoba de 2 de marzo de 2006

SAP de Madrid de 4 de marzo de 2006

SAP de Barcelona de 14 de marzo de 2006

SAP de Valencia de 10 de abril de 2006

SAP de Cordoba de 2 de mayo de 2006.

SAP de Barcelona de 11 de mayo de 2006

SAP de Navarra de 4 de Julio de 2006

SAP de Asturias de 11 de septiembre de 2006.

SAP de Málaga de 20 de Septiembre de 2006

SAP de Madrid de 29 de marzo de 2007

SAP de Barcelona de 28 de junio de 2007

SAP de Castellón de 10 de diciembre de 2007.

SAP de Valencia de 24 de enero de 2008

SAP de Murcia de 27 de marzo de 2009

SAP de Cáceres de 14 de Diciembre de 2009

SAP de Málaga de 29 de Abril de 2010

SAP de Barcelona de 18 de mayo de 2010

SAP de Valencia de 23 de junio de 2010

SAP de Madrid de 9 de julio de 2010

SAP de Vizcaya de 15 de octubre de 2010

SAP de Castellón de 2 de Diciembre de 2010.

SAP de Asturias de 15 de marzo de 2011

SAP de Málaga de 3 de mayo de 2011

SAP de Málaga de 12 de mayo de 2011

SAP de Alicante de 17 de junio de 2011

SAP de Pontevedra de 22 de septiembre de 2011.

SAP de Pontevedra de 29 de septiembre de 2011

SAP de Murcia de 29 de septiembre de 2011

SAP de Murcia de 29 de diciembre de 2011

SAP de Cáceres de 13 de marzo de 2012

SAP de Burgos de 22 de mayo de 2012

SAP de León de 25 de mayo de 2012.

SAP de Valencia de 18 de julio de 2012

SAP de Málaga de 19 de julio de 2012

SAP de Soria de 5 de diciembre de 2012

SAP de Murcia de 31 de julio de 2013

SAP de Barcelona de 17 de junio de 2014

Sentencias de Juzgados de Primera Instancia

Sentencia de 1 de diciembre de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº23 de Sevilla

8. ANEXOS

ANEXO I: NULIDADES, SEPARACIONES Y DIVORCIOS.

SERIE CRONOLÓGICA (2004-2013)¹¹⁰

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TOTAL	132.789	137.044	145.919	137.510	118.939	106.166	110.321	110.651	110.764	100.437
NULIDADES	197	168	174	150	142	127	140	132	133	110
SEPARACIONES	81.618	64.028	18.793	11.583	8.761	7.680	7.248	6.915	6.369	4.900
DIVORCIOS	50.974	72.848	126.952	125.777	110.036	98.359	102.933	103.604	104.262	95.427

¹¹⁰ **Notas:** los datos de 2013 no son directamente comparables a los del año anterior, ya que la disponibilidad de nuevas fuentes auxiliares de información en el ámbito judicial ha permitido mejorar los procesos de estimación y elaboración de esta estadística.

Fuente: Instituto Nacional de estadística.

ANEXO II: DEMANDA DE MODIFICACIÓN SOLICITANDO LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA¹¹¹

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Don Francisco Gómez Rodríguez, Procurador de los Tribunales y de don Alberto Moreno Romero y de doña Araceli Molina Planas, cuya representación ostento por turno de oficio según acredito con el documento núm. uno, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, respetuosamente, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a formular DEMANDA CONSENSUAL DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DEFINITIVAS a fin de que se reduzca la cuantía de la pensión alimenticia acordada en sentencia de separación matrimonial, todo lo cual baso y fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO. Don Alberto Moreno Romero y doña Araceli Molina Planas, se hallan separados en virtud de sentencia de fecha 20 de mayo de 2005, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Salamanca en los autos de separación núm. 750/96, sentencia que es firme y ejecutiva, no habiéndose producido hasta el presente modificación de su contenido por cualquier otra resolución firme. Como documento núm. dos, se acompaña copia de dicha sentencia, dejando designados a efectos probatorios los archivos del mencionado juzgado.

SEGUNDO. En el fallo de la citada resolución se adoptó como medida definitiva, entre otras la siguiente: «En concepto de pensión alimenticia para los hijos, don Alberto Moreno Romero abonará mensualmente a doña Araceli Molina Planas y en la cuenta bancaria que se designe la cantidad de 600 euros, cantidad que será revisada cada año de acuerdo con las variaciones que experimente el IPC».

¹¹¹PÉREZ MARTÍN, Antonio Javier, “La modificación...., op, cit, p.779.

TERCERO. En la actualidad, y motivado por un expediente de regulación de empleo en la empresa donde prestaba sus servicios, el señor Moreno ha perdido el trabajo fijo que tenía, habiendo incumplido dicha empresa los compromisos económicos contraídos con los afectados, por lo que ha causado alta en las listas del Instituto Nacional de Empleo (INEM), percibiendo en concepto de desempleo la cantidad mensual de 600 euros. A efectos de prueba se presenta certificado expedido por el INEM acreditativo de las percepciones económicas, y se dejan señalados los archivos del Juzgado de lo Social núm. 4 de esta ciudad, donde se tramita el expediente de regulación de empleo y extinción de las relaciones laborales.

CUARTO. Conscientes ambos progenitores de la importante modificación producida en los ingresos del señor Moreno, han procedido de forma consensuada a redactar una propuesta de convenio regulador que sustituya a las medidas que se acordaron en la separación, a fin de adaptar la pensión alimenticia a las circunstancias actuales y acompañarlo a la presente demanda de modificación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

COMPETENCIA. Conforme a lo establecido en el art. 769.2 de la LEC, será Juez competente para conocer del procedimiento de modificación de medidas del último domicilio común o el del domicilio de cualquiera de los solicitantes.

LEGITIMACIÓN. La legitimación activa y pasiva la tienen ambos cónyuges, por establecerlo así el art. 775 de la LEC. No existiendo ya hijos menores de edad no es necesario que sea parte el Ministerio Fiscal.

ACCION QUE SE EJERCITA. Conforme señala el artículo 90 del CC: «Las medidas que el juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias». Por su parte, el artículo 775.1 de la LEC indica que «El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas».

PROCEDIMIENTO. De acuerdo con el apartado noveno del art. 777 de la LEC «La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el

tribunal en los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 775».

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: Que, habiendo por presentado este escrito junto con los documentos y copias simples que se acompañan, se sirva admitirlo, teniéndome por parte en la representación acreditada y por formulada demanda de modificación de medidas, y tras la ratificación de mis representados, se dicte sentencia aprobando la modificación del convenio regulador otorgada por los cónyuges.

Todo ello por ser justicia que pido en Salamanca, a 1 de mayo de 2015.